

2. Negociaciones de paz en África

- A lo largo del año 2023 se identificaron 18 procesos y negociaciones de paz en el continente africano, lo que supone prácticamente el 40% de los 45 procesos de paz a nivel mundial.
- El reinicio de los enfrentamientos en el norte de Malí entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Argel de 2015 puso en riesgo la continuidad del mismo.
- En Mozambique se completó el proceso de desarme y desmovilización de excombatientes de la RENAMO previsto en el acuerdo de paz de 2019.
- Se produjeron avances en la implementación del acuerdo de paz de 2022 entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré, aunque persistieron las atrocidades contra la población civil por parte de las fuerzas eritreas y de las milicias Fano.
- En medio del clima de violencia en la región etíope de Oromiya, se iniciaron conversaciones de paz entre Etiopía y el grupo armado OLA en Zanzíbar (Tanzania), con la facilitación de Kenya.
- Etiopía, Egipto y Sudán reanudaron las conversaciones sobre el contencioso de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), pero no se produjeron avances en las diferentes rondas negociadoras.
- El acuerdo entre Etiopía y Somalilandia sobre un eventual futuro reconocimiento oficial de Somalilandia amenazó con desestabilizar el Cuerno de África y frustró el diálogo entre Somalia y Somalilandia.
- La escalada de la ofensiva del grupo armado congoleño M23 en octubre, apoyado por Rwanda, provocó un incremento de la tensión entre RDC y Rwanda y las iniciativas regionales para una salida negociada fracasaron.
- El inicio de un nuevo conflicto armado en Sudán entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) rompió las negociaciones encaminadas a lograr la transición política e instaurar un gobierno civil en el país.

Este capítulo analiza los procesos y negociaciones de paz en África en 2023. En primer lugar, se examinan las características y tendencias generales de los procesos de paz en la región y, en segundo lugar, se profundiza en la evolución de cada uno de los casos durante el año, incluyendo referencias a la agenda de género, paz y seguridad. Al inicio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países del continente africano que fueron escenario de negociaciones durante 2023.

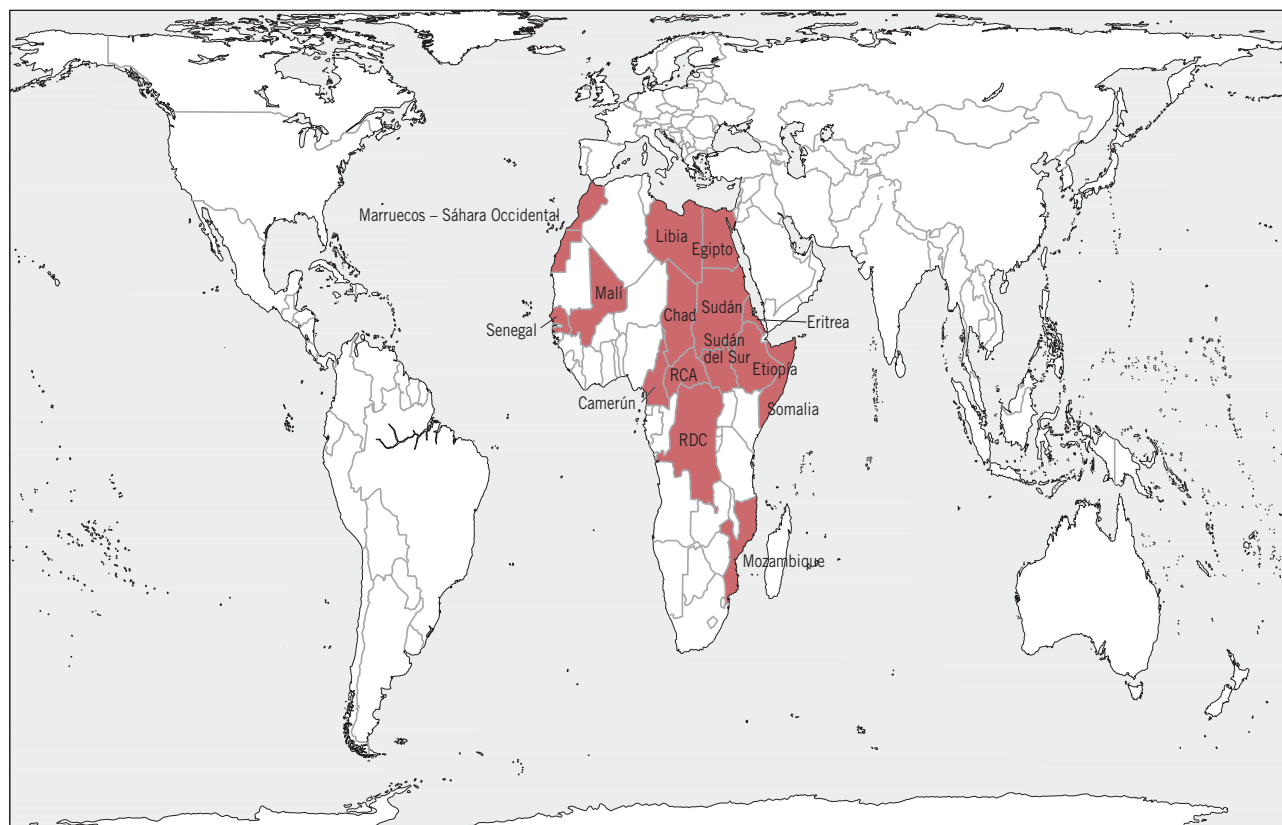
Tabla 2.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en África en 2023

| Procesos y negociaciones de paz | Actores negociadores | Terceras partes |
|---|---|--|
| Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) | Gobierno de Camerún; cuatro gobiernos interinos (IG) autoproclamados representantes del pueblo de Ambazonia: IG Sisiku (Sisiku Ayuk Tabe, primer presidente de la República Federal de Ambazonia; vicepresidente Dabney Yerima); los otros tres IG son derivados del IG Sisiku, creados cada uno tras el rechazo del anterior IG a dejar el poder: IG Sako (Samuel Sako); IG Marianta (Iya Marianta Njomia); IG Chris Anu (aliado del grupo armado Red Dragons de Leke Olivier Fongunueh); coalición Ambazonia Governing Council (AGovC, liderada por Cho Ayaba, brazo armado Ambazonia Defense Forces, ADF); otros movimientos y coaliciones políticas, militares y de la sociedad civil: Ambazonia Coalition Team (ACT), que incluye APLM/SOCADEF, FSCW, MoRISC, SCARM, SCAPO, SCNC (facción Norte América) y RoAN; Southern Cameroons Stakeholder Platform (SCSP), que incluye a movimientos políticos, sociedad civil, grupos armados, grupos religiosos: IG Sisiku, SCNC (exceptuando facción Norte América), Consortium, Global Takumbeng, SCAWOL, SCEW, SNWOT, SCCOP, AIPC, AYC, SCYC, SCCAF, WCA, DAC, CHRDA, CHRI, Reach Out, organizaciones de presos, de población desplazada y refugiada, líderes tradicionales, entre otros. | Iglesia, organizaciones de la sociedad civil, USIP, Coalition for Dialogue and Negotiation (CDN), Vaticano, Canadá, EEUU |

| Procesos y negociaciones de paz | Actores negociadores | Terceras partes |
|--------------------------------------|--|---|
| Chad | Proceso de Doha: Consejo Militar de Transición, 52 grupos armados (entre los que destacan el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT), el Consejo de Mando Militar para la Salvación de la República (CCSMR), la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD) y la Unión de Fuerzas de Resistencia (UFR) DNIS: Consejo Militar de Transición, organizaciones de la sociedad civil, 34 de los 52 grupos armados firmantes del proceso de Doha. Los 18 grupos armados no firmantes del acuerdo de Doha formaron el Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), entre ellos el FACT y el CCSMR | Qatar; UA y ONU, entre otros; Comunidad de Sant'Egidio, CEEAC |
| Eritrea – Etiopía | Gobierno de Eritrea y Gobierno de Etiopía | Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, EEUU |
| Etiopía (Oromiya) | Gobierno Federal, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA) | IGAD, Kenya, Noruega y Tanzania |
| Etiopía (Tigré) | Gobierno Federal, autoridades político-militares de la región etíope de Tigré (Frente de Liberación Popular de Tigré) | UA, EEUU, IGAD |
| Etiopía–Egipto–Sudán | Etiopía, Egipto y Sudán | UA, Banco Mundial (BM), EAU, UE y EEUU |
| Libia | Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), Consejo Presidencial, Alto Consejo de Estado, Cámara de Representantes (CdR), LNA o ALAF | ONU; Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Holanda, Suiza, Türkiye, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez (Proceso de Berlín) |
| Malí | Gobierno, Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD) que aglutina a Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –MNL, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA– | Argelia, Francia, CEDEAO, UA, ONU, UE, Centre for Humanitarian Dialogue, organizaciones de la sociedad civil, Mauritania, Carter Center (Observador Independiente del Acuerdo de Paz) |
| Marruecos – Sáhara Occidental | Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO) | ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia) |
| Mozambique | Gobierno, RENAMO, Junta Militar de la RENAMO | Equipo mediador nacional, Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano), Iglesia Católica, ONU, Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), UA, UE, Botswana, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Tanzania |
| RCA | Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka | Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán |
| RDC | Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado M23, grupos armados del este del país, oposición política y sociedad civil | UA, SADC, CIRGL, EAC, UE, ONU, OIF, EEUU, Angola, Qatar |
| Senegal (Casamance) | Gobierno, facciones del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) | CEDEAO, Centre for Humanitarian Dialogue, Guinea Bissau, Cabo Verde, Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC) |
| Somalia | Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia | ONU, IGAD, Türkiye, UA |
| Somalia – Somalilandia | Gobierno Federal de Somalia, República de Somalilandia | Türkiye, Noruega |
| Sudán | Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: Gobierno de Sudán, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur), Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW, Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N) facciones Malik Agar y Abdelaziz al-Hilu Negociaciones de paz crisis nacional: Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y Rapid Support Forces (RSF) | Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania, UA, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda, IGAD, UNITAMS Negociaciones de paz crisis nacional: Mecanismo trilateral (UNITAMS, UA e IGAD (Etiopía, Sudán del Sur, Djibouti, Kenya, Uganda)); Quad (EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), Egipto |
| Sudán del Sur | Acuerdo de Paz Revitalizado (2018): Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), otros grupos armados (SSOA, SPLM-FD, entre otros); Facciones del SPLM-IO (facción Kitwang liderada por Simon Gatwech Dual y facción dirigida por el general Johnson Olony) Negociaciones de Roma: Gobierno, Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSOG) –antes SSOMA: National Salvation Front (NAS), South Sudan United Front (SSUF), the Real SPLM, South Sudan People's Patriotic Movement (SSPPM). | Acuerdo de Paz Revitalizado (2018): "IGAD Plus" (Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda), UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches Negociaciones de Roma: Comunidad de Sant' Egidio |
| Sudán - Sudán del Sur | Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur; Comunidades étnicas de la región de Abyei | IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), UNISFA |

*en negrita, se analizan en el apartado 2.2.

Mapa 2.1. Negociaciones de paz en 2023 en África



■ Países con procesos y las negociaciones de paz en África en 2023

2.1 Negociaciones en 2023: tendencias regionales

A lo largo del año 2023 se registraron **18 procesos y negociaciones de paz en el continente africano**, lo que supone el 40% de los 45 procesos de paz identificados a nivel mundial. Esta cifra es superior a la de años precedentes (15 procesos y negociaciones de paz en 2022, 12 procesos de paz en 2021, 13 en 2020), aunque por debajo de los registrados en 2019 (19) y 2018 (22). Nueve negociaciones se ubicaron en el Cuerno de África –Sudán, Sudán del Sur, Sudán-Sudán del Sur, Eritrea-Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Etiopía-Egipto-Sudán, Somalia y Somalia-Somalilandia–, tres en África Central –Chad, RCA y RDC–, otras cinco en el Norte de África y África Occidental –Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Libia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental y Senegal (Casamance)– y la restante en el sur de África –Mozambique. El aumento de 2023 respecto a 2022 se debe a la incorporación al análisis de tres nuevos procesos de paz durante el año, como son el proceso de negociación iniciado entre el Gobierno Federal de Etiopía y representantes del grupo armado Oromo Liberation Army (OLA) en Tanzania; la reanudación de las conversaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD); y el relanzamiento de los contactos y las iniciativas internacionales de cara a impulsar un

proceso de diálogo y negociación para promover la reconciliación entre Somalia y Somalilandia.

Diez de estas 18 negociaciones de paz estaban vinculadas a situaciones de conflicto armado: los casos de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Libia, Malí, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Los ocho procesos restantes tuvieron lugar en contextos de tensión sociopolítica, que en algunos casos también habían padecido episodios de enfrentamiento bélico: Chad, Eritrea-Etiopía, Etiopía-Egipto-Sudán, Marruecos-Sáhara Occidental, Mozambique, Senegal (Casamance), Somalia-Somalilandia y Sudán-Sudán del Sur. Algunos de los procesos de paz identificados correspondían a conflictos iniciados en la última década –Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste, 2018), Libia (2011), Malí (2012)–, otros se remontan a la década anterior –RCA (2006), Sudán (2003), Sudán del Sur (2009) y Sudán-Sudán del Sur– mientras que otros conflictos y situaciones de tensión se remontan a los años noventa del siglo XX –como los casos de RDC y Somalia– por lo que las iniciativas y negociaciones de paz vinculadas a estos conflictos han evolucionado profundamente desde su origen en lo concerniente a los actores implicados y las causas de las disputas. En el caso de Mozambique, el último ciclo de violencia entre el Gobierno y RENAMO se inició en 2013, aunque se remonta a una aplicación limitada del Acuerdo de Paz de 1992 que puso fin al

conflicto entre las partes iniciado en 1974. Por su parte, el conflicto en la región senegalesa de Casamance, iniciado en 1982, alcanzó su primer acuerdo de paz en 2004 y posteriormente prosiguieron los enfrentamientos de baja intensidad protagonizados por las facciones que no aceptaron el acuerdo.

El proceso de paz analizado más longevo del continente y que padece una parálisis estructural es el que enfrenta a Marruecos y el Sáhara Occidental, iniciado a partir del acuerdo de cese el fuego de 1991. A su vez, desde la caída de Siad Barre en Somalia en 1991 y la autoproclamación de Somalilandia como república independiente ese mismo año –no reconocida por la comunidad internacional– se han sucedido, sin éxito, diferentes iniciativas para promover la reconciliación entre ambas entidades y la reintegración de Somalilandia en el seno de Somalia.

En relación con los actores participantes en las negociaciones, en el año 2023 solo **cinco casos involucraron exclusivamente a gobiernos de los respectivos países y grupos armados o movimientos político-militares en las negociaciones.** Fueron los contextos de Etiopía –con la implementación del acuerdo entre el Gobierno federal etíope y las autoridades político-militares de la región de Tigré, así como entre el Gobierno federal etíope y el grupo armado OLA– Mozambique –entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO–, RCA –entre el Gobierno y los grupos armados que no abandonaron el proceso de paz en diciembre de 2020– y Senegal –entre el Gobierno y una facción del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC). **En paralelo, ocho de los otros 18 procesos de paz se caracterizaron por un mapa de actores más complejo, con Gobiernos, grupos armados y actores opositores políticos y sociales.** Se constató así en procesos como **Camerún** (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) –donde los contactos exploratorios en Canadá han implicado a diferentes actores del espectro secesionista político-militar–, **Malí** –donde el proceso negociador ha involucrado en los últimos años a las autoridades nacionales y a numerosos actores políticos y armados de la región de Azawad (norte)–, **Libia** –entre actores políticos y militares que controlan distintas zonas del país–, **Somalia** –entre el Gobierno federal, los liderazgos de los estados federales y otros actores políticos y militares del país–, **Sudán** –entre el Gobierno, oposición política, grupo paramilitar RSF y actores insurgentes de diversas regiones del país–, **Sudán del Sur** –entre el Gobierno, el grupo armado SPLM/A-IO y otros grupos menores, tanto de la oposición política como armados– y **RDC** –donde las negociaciones involucraron, por un lado, al Gobierno congolés y al Gobierno rwandés, y por otro lado, al Gobierno congolés y diferentes grupos armados del este del país. A su vez, **otros procesos**

Todos los procesos y negociaciones analizados contaban con el apoyo de terceras partes, ya sean organizaciones internacionales, organizaciones regionales, Estados y organizaciones religiosas o especializadas en mediación y facilitación

negociadores estuvieron protagonizados por los gobiernos de países vecinos u organismos regionales, en el marco de disputas interestatales. Ejemplos de ello fueron el proceso de diálogo entre **Sudán y Sudán del Sur**, el proceso estancado entre **Eritrea y Etiopía** y las conversaciones entre **Etiopía, Egipto y Sudán**, en lo relativo a la gestión de las aguas del río Nilo. Un caso, el de Marruecos-Sáhara Occidental –bloqueado en los últimos años– involucra al Gobierno marroquí y al Frente POLISARIO, que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976, y es considerada como una disputa internacional por tratarse de un territorio considerado por la ONU como pendiente de descolonizar.

En relación con las terceras partes implicadas en los procesos de paz en África, **todos los procesos y negociaciones analizados contaban con el apoyo de terceras partes, ya sean organizaciones internacionales, organizaciones regionales, Estados y organizaciones religiosas o especializadas en mediación y facilitación.**

Cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores que desempeñan tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública. En todos los casos había más de un actor desempeñando tareas de mediación y facilitación, entre los que destaca el papel predominante de la ONU, involucrada en 11 de los 18 casos en el continente: Libia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Mozambique, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Otro actor destacado fue la UA, que participa en 12 casos: los procesos de Etiopía (Tigré), Etiopía-Egipto-Sudán, Libia, Chad, Malí, Mozambique, RCA, RDC, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur. En el caso del Chad, ambas organizaciones desempeñaron el rol de observadoras, ya que la mediación recayó sobre Qatar.

A su vez, **organizaciones intergubernamentales regionales africanas participaron como terceras partes**, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en Senegal (Casamance); la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) en los procesos de RCA y de RDC; la Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC) en el proceso negociador de RCA; la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en Mozambique; la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en Etiopía (Oromiya), Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur; y la Comunidad de África del Este (EAC) en RDC. Asimismo, además de las organizaciones intergubernamentales africanas, otros organismos intergubernamentales participaron como terceras partes en el continente africano, como la UE –en Libia, Malí, Mozambique, RCA, RDC, Sudán del Sur y entre Sudán-Sudán del Sur.

Los Estados también continuaron teniendo un papel destacado como terceras partes en los procesos de paz y negociaciones en África. En todos los procesos de paz analizados hubo la participación de Estados liderando o apoyando iniciativas de diálogo y negociación. A su vez, cabe destacar el papel como tercera parte de actores religiosos, de carácter local o internacional, en especial la Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano) en Camerún, Mozambique, RCA y Sudán del Sur; la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en RCA; instituciones religiosas locales en Mozambique, en RDC y Sudán del Sur; formatos ecuménicos como la Conferencia General Anglófona (AGC, por sus siglas en inglés), formada por los líderes católicos, protestantes y musulmanes en Camerún, o el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur (SSCC, por sus siglas en inglés). También destaca el papel desempeñado por organizaciones especializadas en mediación y facilitación, en especial el Centro para el Diálogo Humanitario, presente en contextos como Libia, Malí, RCA o Senegal; el Centro Carter, presente en Malí; o la Coalition for Dialogue and Negotiation (CDN), presente en Camerún, entre otros.

En el marco de esa proliferación de actores mediadores, **siguió siendo frecuente, como en los últimos años, la participación de terceras partes en el marco de formatos conjuntos**, como los llamados grupos de amigos y grupos de apoyo. Fue el caso, entre otros, del Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia) en el proceso de diálogo entre Marruecos y el Frente POLISARIO; el comité de seguimiento internacional en el caso de Libia, en el que participan el Cuarteto de Libia (ONU, Liga Árabe, UA y UE) además de una decena de países; el Grupo de Apoyo Internacional (que incluye a la ONU y la UE) y la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (que incluye la UA, CEEAC, con apoyo de la ONU, la CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad) en el caso de RCA; la IGAD Plus, que facilita el diálogo en Sudán del Sur y que está integrada por la IGAD, los cinco miembros del High-level Ad Hoc Committee de la UA (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia). En el caso de Sudán, el estallido en abril de un nuevo conflicto armado dio al traste con los avances logrados gracias al doble proceso mediador existente: el mecanismo trilateral (conformado por la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), la UA y la IGAD) y el conocido como Quad (que incluye a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y EAU).

Respecto a **las agendas** de las negociaciones, los **ceses de hostilidades y acuerdos de alto el fuego** estuvieron presentes en diversos contextos, como en las regiones etíopes de Oromiya y Tigré, Senegal (Casamance), Sudán o en RDC, en relación al conjunto de grupos armados del este del país y en especial del M23. También fue recurrente el ámbito de la **reforma del sector de la seguridad**, y en especial los procesos de desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes (DDR) y la reforma o creación de nuevos cuerpos de seguridad post acuerdos de paz –con

tipologías y nombres diversos como unidades mixtas, fuerzas conjuntas o ejércitos nacionales unificados– estuvo presente en la mayoría de contextos analizados, como Chad, Etiopía (Tigré), Mozambique, Malí, RCA, RDC, Senegal (Casamance), Sudán, Sudán del Sur y Libia. Cuestiones vinculadas a la **gobernanza** también estuvieron presentes en las negociaciones en marcha en diversos contextos, como Chad, Malí, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Libia. Temas relativos al **grado de autogobierno y al grado de descentralización administrativa, incluyendo la independencia** de los territorios estuvieron presentes en Camerún, Etiopía (Tigré), Malí, Senegal (Casamance), Sudán del Sur, y Marruecos-Sáhara Occidental. El proceso entre Somalia y Somalilandia, aunque particular, formaría parte de este grupo. Por último, en lo concerniente a la **gestión de los recursos y del territorio**, las demarcaciones fronterizas inconclusas, como en los contenciosos entre Eritrea y Etiopía y entre Sudán y Sudán del Sur fue otro de los ámbitos de negociación presentes en el continente africano, así como el contencioso en torno a la gestión de las aguas del río Nilo entre Etiopía, Egipto y Sudán.

Respecto a la **agenda de género, paz y seguridad en los procesos en el continente africano**, estos continuaron caracterizándose por la **escasa participación de mujeres en los equipos de negociación en los procesos en marcha así como por la ausencia de arquitecturas que integraran la perspectiva de género en dichos procesos**. Cabe destacar, no obstante, los casos de **Somalia y Somalilandia, Mozambique y RCA**. En el proceso de diálogo entre **Somalia y Somalilandia**, cabe remarcar el nombramiento de la ex ministra de Somalilandia, Edna Adan Ismail, como enviada de Somalilandia para las conversaciones entre Somalilandia y Somalia. En el caso de **Mozambique**, la Secretaría del Proceso de Paz (PPS) estaba compuesta por un 50% de mujeres en su personal y un 63% de ellas ocupando altos cargos. El proceso de desarme, desmovilización y reintegración, que culminó durante el 2023, intentó integrar la perspectiva de género en su diseño e implementación. Las actividades de desmovilización se llevaron a cabo en centros de alojamiento diseñados para incluir servicios sensibles al género, incluidos alojamiento separado e instalaciones de higiene para mujeres. En el caso de **RCA**, la ONU destacó que la presencia de mujeres en los comités locales de paz y reconciliación, que había aumentado desde la firma del Acuerdo Político en 2019, era en octubre del 35%. Por otro lado, la situación se deterioró en **Malí** y en el caso de **Sudán del Sur** se evidenciaron los pocos avances. En el caso de **Malí**, uno de los pocos procesos de paz que incorporaba la participación de mujeres en los mecanismos de seguimiento del acuerdo de paz de Argel de 2015, la reanudación de los combates en el norte del país entre las partes signatarias puso en peligro el conjunto del proceso de paz. En el caso de **Sudán del Sur**, a pesar de que el acuerdo de paz incluía una cuota del 35% para mujeres en todas las instituciones y procesos ejecutivos y de transición, esta disposición no se cumplió en la mayoría de los casos, ni en la mayoría de las comisiones

creadas para implementar el acuerdo, ni en el Gobierno y el Parlamento actuales. En los órganos creados durante el 2023, la cuota acordada de representación de las mujeres solo era respetada en el Consejo de Partidos Políticos (40%), pero no en la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución (32%) ni en el Comité Electoral Nacional (22%). Por otro lado, las noticias positivas en Sudán del Sur fueron la ratificación del Protocolo de la UA de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África (conocido como el Protocolo de Maputo) y la aprobación del segundo plan de acción nacional sobre la agenda de mujeres, paz y seguridad (2023-2027).

Es remarcable, por otra parte, que en la mayoría de los contextos numerosos movimientos y organizaciones de mujeres continuaron exigiendo una participación activa en los procesos de paz y se pusieron en marcha diversas iniciativas locales de construcción de paz lideradas por la sociedad civil, en especial por organizaciones de mujeres. En este sentido, cabe destacar los casos de **Camerún, Somalilandia y Sudán**. El incansable trabajo que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil camerunesa han llevado a cabo en los últimos años, llevó a que la fundación alemana German Africa Foundation (DAS)¹ concediera el German Africa Prize 2023 al paraguas de 80 organizaciones de mujeres mediadoras y activistas que organizó la 1ª Convención Nacional de Mujeres por la Paz en Camerún en 2021,² que reunió a más de 1.500 mujeres representantes de la sociedad civil que trabajan por la paz en el país. En el caso de **Somalilandia**, la enviada especial Edna Adan recibió el premio Templeton Prize en junio de 2023 por su labor en la construcción de la paz y su lucha contra la mutilación genital femenina en el Cuerno de África desde el hospital que lleva su nombre en Hargeysa, la capital de Somalilandia. En este sentido, este premio puso en valor el tradicional papel de las organizaciones de mujeres somalíes en el impulso de iniciativas de construcción de paz y de diálogo. En el caso de **Sudán**, desde el inicio de los enfrentamientos armados entre las SAF y las RSF surgieron diferentes iniciativas dirigidas por mujeres que pedían un alto el fuego, pusieron de relieve las necesidades humanitarias, condenaron la violencia sexual relacionada con el conflicto y exigieron la participación de las mujeres en las negociaciones de los altos el fuego y de todo proceso político futuro y denunciaron la falta de inclusividad de las mujeres en estos espacios. Entre las iniciativas más destacadas, el 13 de julio 75 organizaciones de la sociedad civil, incluidas fuerzas políticas, grupos de defensa de los

A pesar de la persistente ausencia de las mujeres en los procesos formales de negociación en África, su participación activa en la construcción de la paz se evidenció en numerosos contextos

derechos de las mujeres, redes de jóvenes, comités de resistencia, sociedad civil y actores del mundo académico, emitieron una Declaración de Principios de los Agentes Civiles para Poner Fin a la Guerra y Restablecer la Democracia en el país.

No obstante, la realidad continuó siendo de extrema gravedad. Cabe destacar el retroceso en términos de violencia de género y de la aplicación de la agenda de mujeres, paz y seguridad, como evidenció la grave situación de las mujeres **en Tigré (Etiopía), RCA** – donde el propio Mohamed Ag Ayoya, representante especial adjunto del secretario general de la ONU en el país y coordinador humanitario de la MINUSCA, señaló que la grave crisis que padece el país debería calificarse no solo como una crisis humanitaria, sino una “crisis de protección y género”– **RDC** – donde la salida de la MONUSCO durante 2024 podía agravar aún más esta situación– o **Somalia**, donde la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, reveló una situación devastadora. A pesar de todo ello, organizaciones regionales y ONU Mujeres continuaron llevando a cabo numerosas actividades para promover el empoderamiento y participación de mujeres en las iniciativas de construcción de paz en el continente, como fue el caso de Sudán, o en los procesos electorales, como fue el caso de las elecciones de RDC, o en actividades vinculadas a la justicia transicional, como fue el caso de Etiopía, con el objetivo de garantizar la participación de las mujeres en el desarrollo de una política de justicia transicional inclusiva y sensible al género.

Respecto a la evolución de las negociaciones de paz durante 2023, cabe destacar la evolución negativa de la mayoría de procesos de paz del continente africano.

Durante el año no se firmó ningún nuevo acuerdo de paz entre las partes enfrentadas –salvo el caso del acuerdo alcanzado en Senegal (Casamance) entre el Gobierno y una facción del MFDC y algunos acuerdos intercomunitarios, entre los que destacamos varios acuerdos en la región de Abyei, en el contencioso entre Sudán y Sudán del Sur – y, por el contrario, procesos avanzados como los casos de Malí o de Sudán sufrieron importantes retrocesos debido a la reanudación de los combates. Además, iniciativas esperanzadoras y gestadas durante meses de esfuerzos discretos como los casos de Camerún y Somalia-Somalilandia fracasaron a los pocos días de su anuncio. Otros ejemplos, como Chad y RCA, celebraron controvertidos referéndums constitucionales en el marco de la implementación de acuerdos previos que socavaban la gobernabilidad democrática de ambos países y suponían un retroceso

1 DAS press release, *German Africa Award 2023 goes to the Cameroonian women's peace platform "1st National Women's Convention for Peace in Cameroon"*, DAS, 30 de noviembre de 2023.

2 Véase Camerún en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

en términos de la independencia entre los poderes del Estado, más presidencialista, según diversos análisis. En **Camerún**, los contactos secretos entre representantes del Gobierno camerunés y de diversos grupos separatistas anglófonos, facilitados por Canadá entre octubre y diciembre de 2022, como parte de una nueva iniciativa para impulsar un proceso de paz, se confirmaron el 20 de enero de 2023, con el anuncio de la ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, en el que afirmó que Canadá tenía un mandato para facilitar las conversaciones de paz entre las partes en conflicto en Camerún. Sin embargo, tres días después del anuncio, el Gobierno de Camerún desmintió los esfuerzos de Canadá, negando que hubiera pedido a una “parte extranjera” que mediara en una resolución del conflicto. En **Malí**, durante el año las partes signatarias del Acuerdo de paz de Argel de 2015, el Gobierno y grupos armados árabe-tuareg organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP) reanudaron los combates poniendo en peligro el acuerdo de paz. Uno de los detonantes del reinicio de la guerra entre las partes signatarias se relaciona con la retirada de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA), que se hizo efectiva entre julio y diciembre, aunque las tensiones entre las autoridades de transición y los movimientos armados habían comenzado desde la llegada al poder de la Junta militar tras el golpe de Estado de mayo de 2021. En **Somalia**, el Gobierno Federal continuó insistiendo en su política de aproximación hacia los estados miembros de la federación, y durante el año se celebraron varias reuniones del Consejo Consultivo Nacional (NCC por sus siglas en inglés), órgano que reúne al Gobierno Federal y a los estados miembros, y se produjeron algunos avances en el reparto de poder en el seno de la federación. No obstante, Puntlandia decidió suspender las relaciones con Mogadiscio y anunció que operaría como una entidad autónoma hasta que la constitución provisional estuviera finalizada. En paralelo, a finales de 2022 se relanzaron los contactos y las iniciativas internacionales para promover el diálogo entre **Somalia y Somalilandia**, que culminaron con una reunión en diciembre de 2023 entre ambos presidentes en Djibouti. Sin embargo, esta histórica reunión se vio ensombrecida por el anuncio el 1 de enero de 2024 por parte de Etiopía y de Somalilandia de la firma de un memorando de entendimiento entre ellos que desencadenó una grave crisis diplomática entre Somalilandia, Somalia y Etiopía, ya que dicho acuerdo incluía, entre otras cuestiones, el posible reconocimiento de Somalilandia por parte de Etiopía como estado independiente. En **Chad**, la firma del acuerdo de paz de Doha –del que quedaron al margen 18 de los 52 grupos armados– y la celebración

La mayoría de negociaciones de paz en el continente africano evolucionaron negativamente en 2023

del Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano –que fue calificado de farsa por sectores opositores y actores de la sociedad civil– en 2022, contribuyó a la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) por un periodo de 24 meses y la celebración de un referéndum constitucional el 17 de diciembre de 2023 que fue boicoteado por parte de la oposición bajo el argumento de reforzar el presidencialismo en el país y así contribuir a afianzar al golpista Mahamat Déby en el poder porque le permitirá presentarse en las futuras elecciones. **RCA** prosiguió con la implementación del Acuerdo Político de 2019 con los grupos armados que no habían abandonado el marco de negociación y la celebración del referéndum constitucional el 30 de julio, que fue boicoteado por la oposición político-social y por diversos actores armados y que, entre otras cuestiones, eliminó los límites al mandato presidencial, eliminó el Senado y retiró el control parlamentario

de la firma de contratos mineros, que a partir de ahora estaría en manos presidenciales. Aunque la organización regional Comunidad Económica de Estado de África Central (CEEAC) señaló que las condiciones de la consulta habían sido satisfactorias, otros actores de la comunidad internacional cuestionaron los resultados. Por último, en el caso de **Sudán**, las negociaciones impulsadas con la Junta Militar y parte de la oposición política sudanesa encaminadas a lograr la transición política e instaurar un gobierno civil en Sudán durante 2022 –en las que se había logrado un acuerdo marco para la creación de un gobierno civil de transición con elecciones en dos años– se rompieron tras el estallido el 15 de abril de un nuevo conflicto armado en el país entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF).³

En el resto de los procesos de paz –Eritrea-Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Libia, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur– no se produjeron avances y, por el contrario, se vieron afectados por numerosas dificultades, estancamiento y crisis. En el caso de **Eritrea y Etiopía**, cinco años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre ambos Estados, la guerra entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré entre 2020 y 2022 contribuyó a que los antiguos enemigos se aliaran para luchar contra el TPLF, pero viejos agravios y nuevas disputas podrían amenazar con revivir el conflicto, según diversos análisis. El hecho de que ni las milicias amhara ni Eritrea participaran del acuerdo de Sudáfrica de noviembre de 2022 entre Etiopía y el TPLF, y que ambos actores hubieran deseado eliminar la resistencia del TPLF en lugar de alcanzar un acuerdo, entre otras cuestiones, contribuyeron a

3 Las negociaciones para lograr un gobierno transicional fueron impulsadas, por un lado, mediante una iniciativa de paz intrasudanesa, conocida como mecanismo trilateral, auspiciada por la UNITAMS, la UA y la IGAD; y por otro, mediante conversaciones informales entre la Junta Militar y el Consejo Central de Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC-CC), en lo que se conoció como la mediación del Quad, que incluyó a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y EAU como terceras partes.

incrementar la tensión entre ambos.⁴ El acuerdo de 2018 derivó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la reapertura de vuelos y de sus fronteras. El optimismo inicial decayó a los pocos meses, ya que después de unos meses, la frontera volvió a cerrarse y quedaron numerosos asuntos sin resolver. Durante el año movimientos de tropas en la frontera común y la ausencia de contactos entre las partes, además de informes sobre un posible apoyo de Eritrea a las milicias amhara Fano, que combaten a los cuerpos de seguridad etíopes, elevaron las alarmas.⁵ En la **región etíope de Oromiya**, persistieron los intensos combates entre el Oromo Liberation Army (OLA) y las fuerzas federales. No obstante, en abril se iniciaron conversaciones de paz en Zanzíbar (Tanzania) con la facilitación de Kenya en nombre de la autoridad regional IGAD, y de Noruega, y aunque no se alcanzaron acuerdos concretos, ambas partes manifestaron su compromiso en buscar una solución al conflicto, y a finales de octubre se celebró una segunda ronda negociadora en Tanzania, bajo la mediación de la IGAD. Fuentes diplomáticas en el anonimato destacaron su optimismo ante los avances del proceso negociador. Cabe destacar que durante el año **Etiopía, Egipto y Sudán** acordaron reanudar las conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), aunque no se produjeron avances en las diferentes rondas de negociación celebradas.

En **Libia** continuaron las negociaciones que involucran a distintos actores locales e internacionales, pero no se consiguió un acuerdo político definitivo para la celebración de elecciones en el país, que inicialmente estaban previstas para diciembre de 2021, y hasta finales de año persistían las dificultades en torno al proceso político. En **RDC** las negociaciones de paz permanecieron estancadas en paralelo a la escalada de la violencia por parte del M23 y el incremento de las presiones a Rwanda para que interrumpiera su apoyo al grupo armado y su participación directa en acciones bélicas en territorio congolés. No se produjeron avances ni en el proceso de Luanda –el diálogo entre RDC y Rwanda por su apoyo al grupo M23, en el marco del cual se alcanzó en 2022 el acuerdo de Luanda y un alto el fuego por parte del M23 que no fue respetado– y ni en el proceso de Nairobi –iniciativas de diálogo intercongolés entre Gobierno, sociedad civil y grupos armados, entre ellos el M23 y, por el contrario, la amenaza de una escalada de la violencia con una confrontación entre RDC y Rwanda se hacía más tangible. En paralelo, el proceso de negociación entre **Sudán y Sudán del Sur** se vio afectado como consecuencia del estallido del conflicto armado en Sudán, lo que dificultó que se produjeran avances en las negociaciones entre ambos países, sobre todo vinculadas a la resolución del contencioso por la región de Abyei, aunque sí se lograron avances en la resolución de disputas intercomunitarias. En el caso de **Sudán del Sur**, se produjeron algunos

avances en la implementación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS) y se confirmó la celebración de elecciones presidenciales para diciembre de 2024. El 22 de febrero marcó el final del plazo original del período de transición de tres años establecido en el R-ARCSS y el inicio del período de transición ampliado de 24 meses, que finalizará, según lo acordado por las partes en virtud de la hoja de ruta, el 22 de febrero de 2025. También al inicio de año, el Gobierno de Transición informó de nuevos avances vinculados con la implementación del R-ARCSS, aunque en el segundo y tercer trimestre del año se produjeron nuevas tensiones entre los signatarios del R-ARCSS que amenazaron la unidad del gobierno transicional, y el SPLA-IO sufrió importantes escisiones que debilitaron la formación. Por otro lado, el presidente Kiir levantó la suspensión de las conversaciones de paz de Roma con los grupos no signatarios del R-ARCSS, coincidiendo con la visita al país del papa Francisco, mismas que se trasladarán en 2024 a Kenya. Finalmente, en lo concerniente al conflicto en torno al **Sáhara Occidental**, la búsqueda de una salida política para la cuestión continuó girando principalmente en torno a la actividad diplomática del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, nombrado a finales de 2021, aunque sus gestiones no consiguieron reactivar las negociaciones durante el año. Los intentos de De Mistura por favorecer la reanudación del diálogo se produjeron en un contexto en el que persistieron las hostilidades de baja intensidad entre Marruecos y el Frente POLISARIO tras la ruptura del alto el fuego de 1991 –aunque con menores niveles de violencia respecto a 2022– y la tensión regional entre Marruecos y Argelia.

No obstante, se produjeron algunos **desarrollos positivos en Mozambique, como en los últimos años, y también en Senegal y en Etiopía –en relación con la implementación del acuerdo en Tigré**. En **Mozambique**, se completó el proceso de desarme y desmovilización de los 5.221 combatientes de la RENAMO y el cierre de sus 16 bases militares. Con este paso se cerró definitivamente la implementación del Acuerdo de Maputo para la Paz y la Reconciliación Nacional de 2019 entre el Gobierno de Mozambique y la RENAMO, surgido para poner fin al conflicto armado que se había reiniciado en el año 2012 en el país. En **Senegal (Casamance)**, en línea con el acuerdo de paz alcanzado en 2022, unos 250 rebeldes independentistas de la región sureña de Casamance miembros de la facción del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) autodenominada Comité Provisional de las Alas Políticas y Combatientes del MFDC, dirigida por Cesar Atoute Badiate, entregaron sus armas en mayo en una ceremonia que tuvo lugar en la antigua base del movimiento en la zona de Bignona, en la localidad de Mangone, al sur del país. De forma paralela, en mayo también se informó de la firma de un acuerdo de paz con otra de las facciones del MFDC, la

4. Kheir Omer, Mohammed, *How Eritrea Could Derail the Ethiopian Peace Deal*, Foreign Policy, 10 de noviembre de 2022.

5. Kheir Omer, Mohammed, *Are Ethiopia and Eritrea on the Path to War?*, Foreign Policy, 7 de noviembre de 2023.

denominada facción Diakaye, que fue posible gracias a la mediación de organizaciones de la sociedad civil con sede en Ziguinchor dedicadas a la construcción de la paz en la región de Senegambia organizadas en la Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC). Este acuerdo prevé el desarme y reintegración de combatientes, la implementación de proyectos de desarrollo en la región de Casamance, la entrega de certificados de nacimiento a las personas que no pudieron tener acceso debido a la inestabilidad, así como medidas para garantizar el regreso pacífico de todas las personas refugiadas. Por último, a pesar del clima de violencia por parte de las últimas fuerzas eritreas y de las milicias amhara Fano y de la grave situación humanitaria que padece la **región etíope de Tigré**, se produjeron avances en la implementación del acuerdo de paz de noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal de Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré. A finales de 2022 disolvió el gobierno regional surgido de las elecciones de 2020 (no reconocidas por el Gobierno Federal y que condujeron a la guerra); se inició el restablecimiento de servicios públicos, se reactivó la distribución de la ayuda humanitaria –aunque se interrumpió durante el año por el descubrimiento de casos de corrupción– y se puso en marcha la misión de observación de la UA (AU-MVCM). Durante 2023 se produjo la casi completa retirada de todos los grupos armados y fuerzas extranjeras, en referencia a Eritrea, y se inició el desarme efectivo de los combatientes de Tigré en julio de 2023. Cabe destacar que en febrero el primer ministro Abiy Ahmed se reunió con los líderes del TPLF por primera vez desde 2020, y el TPLF acordó la composición de la administración interina. No obstante, estos positivos avances se vieron ensombrecidos por sus consecuencias en la vecina región de Amhara, en referencia a la escalada de la violencia por parte de las milicias Fano, antiguas aliadas del Gobierno Federal, ahora en su contra como consecuencia de los planes gubernamentales de desmantelar la administración ilegal de Amhara sobre territorios en disputa entre ambas regiones.

2.2. Análisis de casos

África Austral

| Mozambique | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno, RENAMO, Junta Militar de la RENAMO |
| Terceras partes | Equipo mediador nacional, Comunidad de Sant'Egidio (Vaticano), Iglesia Católica, ONU, Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), UA, UE, Botswana, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Tanzania |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de paz de Roma (1992), Acuerdo de Paz y Reconciliación de Maputo (2019) |

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), apoyado por las minorías blancas gobernantes en la antigua Rhodesia (hoy Zimbabue) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de una guerra que causó un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados. El acuerdo dio paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico, aunque con elevados niveles de desigualdad. En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas de un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de cambios, principalmente una profundización de la descentralización y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992, hecho que finalmente ocurrió, desatando la vuelta a los enfrentamientos armados en abril de 2013 y la posterior apertura de un nuevo proceso de negociación de paz acordado en agosto de 2014. La declaración de una tregua en 2016 por parte de RENAMO y los avances del proceso de paz durante 2017 provocaron una reducción ostensible de las acciones bélicas, llegando a la firma de un nuevo acuerdo de paz en agosto de 2019, aunque han persistido los enfrentamientos esporádicos con la fracción disidente de la RENAMO autodenominada Junta Militar de la RENAMO.

Se completó el proceso de desarme y desmovilización de la RENAMO previsto en el acuerdo de paz de 2019.

El 15 de junio se completó formalmente este proceso con el desarme y la desmovilización del último grupo de 347 excombatientes –incluidas 100 mujeres– de RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique) y se procedió al cierre de la última base militar y su cuartel general en Vunduzi, provincia de Sofala. En total, desde el inicio en 2019 del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), 5.221 excombatientes de RENAMO han sido desmovilizados y sus 16 bases militares han sido cerradas. En la ceremonia, a la que asistieron el presidente de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, y el líder de Renamo, Ossufo Momade, Nyusi expresó su esperanza de que el cierre de la última base militar ponga fin a un capítulo sangriento que ha afectado principalmente a las provincias centrales de Mozambique. Nyusi también se comprometió a seguir con el proceso de DDR, cuyo siguiente paso estará centrado en la reintegración de las personas excombatientes en la sociedad mozambiqueña.

El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, emitió un comunicado felicitando al país y afirmando que el cierre final de la última base de RENAMO representaba una “importante contribución para silenciar las armas en África”. Asimismo, Mirko Manzoni, enviado especial de la ONU para Mozambique y presidente del Grupo de Contacto para las conversaciones de paz de Mozambique, elogió el proceso de DDR de Mozambique por su “enfoque centrado en las personas” y elogió al país por demostrar cómo se puede forjar y promover la paz.⁶ Con este paso se cierra definitivamente la implementación del Acuerdo de Maputo para la Paz y la Reconciliación Nacional (Acuerdo de Maputo) firmado en 2019 entre el Gobierno de Mozambique y la RENAMO, surgido para poner fin al conflicto armado que se había reiniciado en el año 2012 en el país.

Género, paz y seguridad

El proceso de desarme, desmovilización y reintegración de 5.221 combatientes de RENAMO concluyó con un total de 257 mujeres y 4.964 hombres desmovilizados, tal y como se había acordado en el acuerdo de paz, según informó la Secretaría del Proceso de Paz (PPS) –la cual está compuesta por un 50% de mujeres en su personal y un 63% de ellas ocupando altos cargos. Según datos de la PPS, 63 mujeres beneficiarias de DDR fueron vinculadas a oportunidades de reintegración (un 24% del total de mujeres), y otras 41 mujeres y familiares fueron integradas en las fuerzas policiales como parte del proceso de reintegración de combatientes. Las actividades de desmovilización se llevaron a cabo en centros de alojamiento diseñados para incluir servicios sensibles al género, incluidos alojamiento separado e instalaciones de higiene para mujeres.⁷

África Occidental

| Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) | |
|---|---|
| Actores negociadores | Gobierno de Camerún; cuatro gobiernos interinos (IG) autoproclamados representantes del pueblo de Ambazonia: IG Sisiku (Sisiku Ayuk Tabe, primer presidente de la República Federal de Ambazonia; vicepresidente Dabney Yerima); los otros tres IG son derivados del IG Sisiku, creados cada uno tras el rechazo del anterior IG a dejar el poder: IG Sako (Samuel Sako); IG Mariana (Iya Mariana Njomia); IG Chris Anu (aliado del grupo armado Red Dragons de Leke Olivier Fongunueh); coalición Ambazonia Governing Council (AGovC, liderada por Cho Ayaba, brazo armado Ambazonia Defense Forces, ADF); otros movimientos y coaliciones políticas, militares y de la sociedad civil: Ambazonia Coalition Team (ACT), que incluye APLM/SOCADEF, FSCW, MoRISC, SCARM, SCAPO, SCNC (facción Norte América) y RoAN; Southern Cameroons Stakeholder Platform (SCSP), que incluye a movimientos políticos, sociedad civil, grupos armados, grupos religiosos: IG Sisiku, SCNC (exceptuando facción Norte América), Consortium, Global Takumbeng, SCAWOL, SCEW, SNWOT, SCCOP, AIPC, AYC, SCYC, SCCAF, WCA, DAC, CHRDA, CHR1, Reach Out, organizaciones de presos, de población desplazada y refugiada, líderes tradicionales, entre otros. |
| Terceras partes | Iglesia, organizaciones de la sociedad civil, USIP, Coalition for Dialogue and Negotiation (CDN), Vaticano, Canadá |
| Acuerdos relevantes | Declaración de Buea (1993, AAC1), Declaración de la AAC2 (1994), Diálogo Nacional (30 septiembre-4 de octubre, 2019) |

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. En 1972 se celebró un referéndum en el que se adoptó una nueva Constitución que sustituyó el Estado federal por un Estado unitario y que también concedió más poderes al presidente, por lo que la parte sur del Camerún británico (conocida como Southern Cameroons) perdió su autonomía y fue transformada en las dos provincias

6 Naciones Unidas, “Declaração do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique”, 6 de agosto de 2023.

7 Secretariado para o Processo da paz, “Integração da dimensão de género”, sin fecha.

actuales, Noroeste y Suroeste. El conflicto, iniciado por cuestiones sectoriales en 2016, se agravó a finales de 2017, con la proclamación de la independencia unilateral el 1 de octubre de ese año. La represión gubernamental a las demandas de una mayoría de la población de la región que exigía un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región, comportó una escalada de la violencia. Los intentos de negociación se han visto afectados por las divisiones del lado gubernamental, y por la complejidad y fragmentación del movimiento secesionista –cuyo liderazgo político se encuentra encarcelado, como el primer presidente de la República Federal de Ambazonia, Sisiku Ayuk Tabe, o en la diáspora– lo que reduce su ascendente sobre los grupos armados en el terreno, mientras que la proliferación de grupos armados, que en algunos casos no responden al liderazgo político, dificulta todavía más la resolución. Ninguna de las iniciativas hasta la fecha –destaca la conferencia general anglófona AAC3 pendiente de celebrar desde 2018, la vía suiza⁸ con facilitación de HD iniciada en 2019, el Gran Diálogo Nacional promovido por el Gobierno de Paul Biya en 2019– ha conseguido avances sustantivos. En 2022 Camerún certificó la finalización de la vía suiza y se iniciaron contactos con facilitación de Canadá.

Los contactos secretos entre representantes del Gobierno camerunés y de diversos grupos separatistas anglófonos, facilitados por Canadá entre octubre y diciembre de 2022, como parte de una nueva iniciativa para impulsar un proceso de paz, se confirmaron y cristalizaron el 20 de enero de 2023. Esta confirmación se produjo con el anuncio de la ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, en el que afirmó que **Canadá tenía un mandato para facilitar las conversaciones de paz entre las partes en conflicto en Camerún**. El 21 de enero el movimiento separatista manifestó su compromiso con el proceso facilitado por Canadá, y numerosos líderes religiosos, de la sociedad civil y de organizaciones de mujeres de las regiones anglófonas celebraron el anuncio. Sin embargo, tres días después del anuncio, **el Gobierno de Camerún desmintió los esfuerzos de Canadá, negando que hubiera pedido a una “parte extranjera” que mediara en una resolución del conflicto**. La negación reveló profundas divisiones entre los altos funcionarios cameruneses y fue una sorpresa, según destacó el ICG en febrero,⁹ dada la participación previa de Yaundé en las conversaciones previas dirigidas por Canadá. Este rechazo supuso un duro golpe a los esfuerzos de construcción de paz que Ottawa había liderado en los meses anteriores. Estos contactos, calificados de conversaciones previas secretas, aparentemente habían ayudado a ambas partes a superar obstáculos clave para iniciar un diálogo formal. Poco después del anuncio de Joly, los líderes anglófonos emitieron una declaración conjunta afirmando su compromiso a participar en las negociaciones con la facilitación de Canadá. Desde entonces no se produjeron

avances. Según el ICG, basándose en esfuerzos anteriores de la facilitación suiza, Canadá había logrado reunir a diversos grupos separatistas que habían manifestado su voluntad de participar en las negociaciones. En el pasado, los grupos separatistas habían permanecido divididos y sin llegar a un consenso entre ellos. Esta vez, su unidad ofrecía al Gobierno camerunés una contrapartida en las negociaciones. Posteriormente, cabe destacar en marzo el anuncio de los cinco principales movimientos separatistas (SOCADEF, AGovC, IG, ACT y Southern Cameroons Civil Society Consortium, también conocido como The Consortium) de la celebración en julio de la All Ambazonia Conference (AAC), también conocida como la Southern Cameroons People's Conference (SCPC) 2023,¹⁰ con el objetivo de unificar la posición del movimiento separatista. La primera reunión se celebró en Canadá del 5 al 8 de octubre de 2023 con grupos y representantes comunitarios, incluidos delegados de Camerún; a los grupos del SCSP se unieron otros grupos como SCAPO, T-SISC, grupos de mujeres de Camerún, comunidades del sur de Camerún de Alemania, Suiza, Canadá, Sudáfrica, EEUU y EAU. Se tomaron resoluciones, una de las cuales fue la de crear una secretaría, la SCPS (Southern Cameroons People's Secretariat). Cabe añadir que el grupo político-militar IG Chris Anu abrió el 11 de diciembre una oficina en Washington después de contratar a una empresa estadounidense en septiembre para ejercer presión a favor del referéndum.

Género, paz y seguridad

La sociedad civil camerunesa, y en especial las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, continuaron movilizadas y, tras el anuncio por parte de Canadá, celebraron la iniciativa como una gran oportunidad para la resolución del conflicto. El incansable trabajo que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil camerunesa han llevado a cabo en los últimos años de cara a construir vías de diálogo, negociación y reconciliación llevó a que la fundación alemana German Africa Foundation (DAS)¹¹ concediera el German Africa Prize 2023 al paraguas de 80 organizaciones de mujeres mediadoras y activistas que organizó la 1ª Convención Nacional de Mujeres por la Paz en Camerún en 2021,¹² que reunió a más de 1.500 mujeres representantes de la sociedad civil que trabajan por la paz en el país. Esta fundación cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos en el Bundestag y promueve la implementación de la política africana del Gobierno Federal de Alemania y las relaciones entre el Gobierno y el continente africano. En paralelo, otra fundación alemana, la Friedrich Ebert Stiftung, celebró en diciembre una mesa redonda para

8 La vía suiza fue una iniciativa promovida por Suiza con el apoyo y facilitación de la organización HD establecida en 2019 –y que el Gobierno de Camerún certificó la finalización de sus actividades en 2022– que contaba el apoyo los Amigos del Grupo de Contacto Suizo (UE, EEUU, Canadá, Bélgica, Alemania, RU).

9 International Crisis Group, *Canada Initiative Offers Opportunity for Cameroon Peace Process*, 9 de febrero de 2023.

10 Southern Cameroons People's Conference 2023, accesible en <https://www.scpconference.com/>.

11 DAS press release, *German Africa Award 2023 goes to the Cameroonian women's peace platform "1st National Women's Convention for Peace in Cameroon"*, DAS, 30 de noviembre de 2023.

12 Véase Camerún en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, febrero de 2022, Barcelona: Icaria.

discutir sobre el papel de las mujeres de Camerún en la construcción de la paz, con la participación de representantes de la 1ª Convención Nacional de 2021, a raíz de la concesión del premio.

| | |
|-----------------------------|--|
| Malí | |
| Actores negociadores | Gobierno, Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD) que aglutina a Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –MNLA, MAA y HCUA–, Plataforma –GATIA, CMFPR, CPA, facción del MAA– |
| Terceras partes | Argelia, Francia, CEDEAO, UA, ONU, UE, Centre for Humanitarian Dialogue, organizaciones de la sociedad civil, Mauritania, Carter Center (Observador Independiente del Acuerdo de Paz) |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de Paz y Reconciliación (2015) |
| Síntesis: | El conflicto armado que afecta a Malí desde principios de 2012 derivó en una crisis institucional –materializada en un golpe militar– y en un progresivo control de la zona norte del país por parte de grupos tuaregs y yihadistas. Desde el inicio del conflicto, diversos actores internacionales –entre ellos CEDEAO, UA y ONU– han promovido iniciativas conducentes al restablecimiento del orden institucional y a la recuperación de la integridad territorial de Malí. En paralelo a las aproximaciones militaristas para enfrentar la crisis, se iniciaron contactos exploratorios con algunos grupos armados (MNLA y Ansar Dine) para buscar una salida negociada. Pese al anuncio de un compromiso con el cese de hostilidades de estos grupos insurgentes, a principios de 2013 una ofensiva de Ansar Dine precipitó una intervención militar internacional liderada por Francia. En mayo de 2014 se volvió a poner en marcha un nuevo proceso negociador, liderado por Argelia, en el que el Gobierno de Malí negoció a dos bandas con las dos coaliciones creadas por los grupos armados: la Coordinadora de Movimientos de Azawad (grupos afines a una fórmula federalista/secesionista) y la Plataforma (grupos afines al Gobierno). En julio de 2015 se logró finalmente la firma de un acuerdo de paz en Argel entre el Gobierno, la CMA y la Plataforma, quedando los grupos de corte yihadista fuera de las mesas de negociación, lo que ha mantenido las hostilidades por parte de estos grupos en un nuevo contexto de implementación de las cláusulas presentes en el acuerdo de paz. Tras el golpe de Estado de mayo de 2021, la CMA y la Plataforma, hasta entonces grupos rivales, se unieron en la coalición Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD). |

Durante el año las partes signatarias del Acuerdo de paz de Argel de 2015, el Gobierno maliense y grupos armados árabe-tuareg organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP) reanudaron los combates poniendo en peligro el acuerdo de paz. Uno de los detonantes del reinicio de la guerra entre las partes signatarias se relaciona con la retirada de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA), aunque las tensiones entre las autoridades de transición y los movimientos armados habían comenzado desde la llegada al poder de la Junta militar tras el golpe de Estado de mayo de 2021. En este

sentido, el año empezó con nuevas tensiones después de que los grupos armados signatarios suspendieran a finales de diciembre de 2022 su participación en el Acuerdo de Argel. En enero el ministro de Relaciones Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, viajó a Argelia y se reunió con su homólogo, Ramtane Lamamra, y el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, para discutir cuestiones relacionadas con el acuerdo de paz, rechazando la propuesta de Argelia de albergar una reunión entre las partes “en terreno neutral”, que solicitaban los grupos armados. Posteriormente, el Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés) que reúne a los grupos signatarios del Acuerdo de Argel de 2015, tanto a la CMA como a la Plataforma, se reunió el 1 de febrero con el mecanismo de mediación internacional del acuerdo (liderado por Argelia) y advirtió que tomarían medidas si el Gobierno continuaba bloqueando la implementación del acuerdo. En marzo, las tensiones aumentaron debido a la movilización de unos 400 vehículos pertenecientes a grupos armados signatarios cerca de la ciudad de Anefis, en la región de Kidal. Este hecho motivó que el Gobierno de Malí enviase una carta a Argelia denunciando “violaciones flagrantes” del acuerdo de paz por parte de grupos armados signatarios, en particular la CMA, acusándolos de colaborar con grupos yihadistas. En un esfuerzo por reiniciar el proceso de paz, el mecanismo de mediación internacional del acuerdo propuso una reunión el 24 de abril entre las partes, que nuevamente fue rechazada por Bamako. El 27 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, visitó Bamako y mantuvo conversaciones con el presidente interino, coronel Goïta, emitiendo una declaración conjunta de compromiso con el acuerdo de 2015. Este hecho provocó una distensión de las tensiones entre las partes, y el 12 de mayo el ministro de Reconciliación Nacional de Malí, coronel Ismaël Wagué, se reunió con representantes de la CMA y la Plataforma en Kidal para restablecer la confianza y facilitar la reanudación del trabajo de los mecanismos de supervisión, reiterando el compromiso del Gobierno con el Acuerdo. Sin embargo, la reorganización del gabinete de Gobierno llevada a cabo por el presidente Goïta el 1 de julio volvió a tensionar las negociaciones cuando este incorporó a 13 nuevos ministros al ejecutivo, perdiendo los grupos signatarios dos de los cuatro ministerios que tenían asignados en el acuerdo de paz.

En este clima, el Gobierno de Malí revocó el consentimiento de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA) en el país y anunció la decisión de cerrarla. El 30 de junio el Consejo de Seguridad de la ONU acordó el fin del mandato de la MINUSMA, cesar las operaciones, transferir tareas y retirar personal antes del 31 de diciembre. El CSP dijo el 21 de junio que la salida de la misión de la ONU “sin una alternativa creíble” asestaría un “golpe fatal” al acuerdo de paz. En julio, la MINUSMA comenzó a entregar sus doce bases militares al Estado maliense, de conformidad con el mandato de la ONU.

El CSP advirtió el 1 de agosto sobre “graves riesgos inminentes” asociados con la entrega al Ejército de Malí de los campamentos de la misión de la MINUSMA en áreas controladas por los grupos armados signatarios. De hecho, en los días siguientes, por primera vez desde la firma del acuerdo de paz, estallaron enfrentamientos importantes entre la CMA y el Ejército maliense, ayudado por miembros del Grupo Wagner (Rusia), en varias regiones del norte (Tombuctú, Kidal o Gao) y que se prolongaron hasta final de año. Este hecho motivó que el 11 de septiembre la CMA comunicase que se consideraba “en guerra” con Bamako. La retirada de la MINUSMA generó la disputa por el control de las bases que hasta la fecha utilizaba la misión de la ONU, produciendo diferentes enfrentamientos armados entre las partes. Los más destacados se produjeron por el control de la ciudad de Anefis (Kidal) y de las bases de la MINUSMA en Ber (Tombuctú), Aguelhok, Tessalit y Kidal (Kidal). En noviembre, el Ejército anunció la toma de la ciudad estratégica de Kidal, base del CSP, quien denunció que la presencia del Ejército en la región representaba una vulneración del acuerdo de paz que les otorga control allí.

El estallido de la violencia provocó divisiones dentro del CSP. El Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) anunció a finales de septiembre su salida de la coalición debido a la postura belicosa del CMA, denunciando que el conflicto sólo beneficiaba a los actores yihadistas. Otros miembros del CSP también expresaron su compromiso con la paz. Ante el peligro que corría el acuerdo de paz en el país, a principios de octubre se produjo la visita a Bamako del ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, hecho que algunos analistas sugirieron que podría representar conversaciones para identificar a un nuevo mediador entre las partes que pueda servir como garante y lograr y garantizar el cumplimiento del alto el fuego. Asimismo, también se valoró la posibilidad de poder retrasar la salida de la MINUSMA por varios meses para apoyar las negociaciones, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de tropas en la MINUSMA de Guinea y Chad, países que mantienen relaciones amistosas con Malí, o bien que la UA asumiera el mandato, o ayudara en los esfuerzos de mediación.¹³ No obstante, en diciembre la MINUSMA puso fin oficialmente a su despliegue tras una década en el país.

Por otra parte, el Carter Center, organismo que actuaba como Observador Independiente del Acuerdo de Paz y Reconciliación en Malí resultante del Proceso de Argel de 2015, no publicó durante el año ningún informe de seguimiento sobre los avances en su implementación.

El reinicio de los enfrentamientos armados en el norte de Malí entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Argel de 2015 puso en riesgo la continuidad del mismo

| Senegal (Casamance) | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno, facciones del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) |
| Terceras partes | CEDEAO, Center for Humanitarian Dialogue, Guinea Bissau, Cabo Verde, Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC) |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo General de Paz entre el Gobierno de la República de Senegal y MFDC (Acuerdo de Ziguinchor) (2004) |

Síntesis:

Casamance es una región senegalesa, situada al sur del país y separada geográficamente del resto de Senegal por el río Gambia, alrededor del cual se encuentra el Estado de Gambia. La región tiene una cultura y un idioma distintos debido a que durante parte del periodo colonial estuvo bajo administración portuguesa. Desde 1982 el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) demanda su independencia. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el MFDC tuvo su máxima expresión de violencia durante los años noventa, concluyendo en 2004 con la firma de los acuerdos de paz por su máximo líder, Diamacoune Senghor. Tras el fallecimiento de Senghor en enero de 2007, el MFDC se dividió en tres facciones armadas principales, encabezadas por Salif Sadio, Caesar Badiatte y Mamadou Niantang Diatta. Desde entonces han proseguido enfrentamientos de baja intensidad protagonizados por las diferentes facciones que no reconocen el acuerdo alcanzado con el Gobierno y que luchan por aumentar su control sobre el territorio.

El 14 de mayo, al menos 250 rebeldes independentistas de la región sureña de Casamance miembros de la

facción del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) autodenominada Comité Provisional de las Alas Políticas y Combatientes del MFDC, dirigida por Cesar Atoute Badiate, entregaron sus armas en una ceremonia que tuvo lugar en la antigua base del movimiento en la zona de Bignona, en la localidad de Mangone, al sur de Senegal.

En la ceremonia participaron varios actores, facilitadores del proceso, representantes electos locales, organizaciones de desarrollo. El gobernador de Ziguinchor, Guédj Diouf, anunció que con la entrega se pone fin a un proceso de negociaciones entre el Estado de Senegal y la facción del MFDC-Sadio, que ha durado casi tres años y emplazó a las otras facciones del MFDC a lograr una paz definitiva al conflicto iniciado en el año 1982.¹⁴ Marc Tisani, representante de la UE en el país, calificó el acto de entrega de armas como un hecho “histórico e importante” para la estabilidad de la región y se comprometió a continuar apoyando al país para lograr la resolución del conflicto que calificó como el “más antiguo del continente”. Este acto se relaciona con el

13 International Crisis Group, “Northern Mali: A Conflict with No Victors”, 13 de octubre de 2023.

14 Swissinfo, “Entregan las armas al menos 250 rebeldes independentistas del sur de Senegal”, 14 de mayo de 2023.

acuerdo de paz alcanzado el 4 de agosto de 2022, entre la facción del MFDC y el Ejecutivo senegalés, firmado en la capital de Guinea-Bissau.

De forma paralela, el 13 mayo también se informó de **la firma de un acuerdo de paz con otra de las facciones del MFDC, la denominada facción Diakaye**. A la firma del acuerdo asistieron, entre otros, el enviado del presidente de Senegal, Macky Sall, alcaldes de Ziguinchor; Bindiona y Dououlou, la comandante de la facción Diakaye, Fatoma Coly, y miembros de la comunidad internacional. En los últimos tres años, organizaciones de la sociedad civil con sede en Ziguinchor dedicadas a la construcción de la paz en la región de Senegambia organizadas en la Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC) han estado mediando entre las partes. El pacto prevé el desarme y la reintegración de combatientes, la implementación de proyectos de desarrollo en la región de Casamance, la entrega de certificados de nacimiento a las personas que no pudieron tener acceso debido a la inestabilidad, así como medidas para garantizar el regreso pacífico de todas las personas refugiadas.¹⁵ En este sentido en 2022 se había avanzado en el retorno de algunas de las aproximadamente 60.000 personas desplazadas, aunque las condiciones del regreso estaban siendo dificultadas por la presencia de minas terrestres en la región. El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Senegal informó en 2023 de que, entre 49 y 170 hectáreas de tierra, predominantemente en la región de Ziguinchor, se encontraban minadas, documentando al menos 453 civiles heridos y 157 muertos por minas desde el comienzo del conflicto.

Por otro lado, medios locales informaron en mayo del fallecimiento de Salif Sadio, actual líder de Atika, brazo armado de la facción principal del MFDC que continúa movilizada. Si bien no se facilitaron informaciones sobre las circunstancias de su muerte, señalaron que Salif se encontraba desde hace años enfermo y que había perdido la capacidad de caminar. Sin embargo, como en otras ocasiones en que se había declarado su muerte, Salif reapareció en agosto en un vídeo durante una entrevista con un emisario enviado por el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Cuerno de África

| | |
|-----------------------------|---|
| Etiopía (Tigré) | |
| Actores negociadores | Gobierno Federal, autoridades político-militares de la región etíope de Tigré (Frente de Liberación Popular de Tigré) |
| Terceras partes | UA, EEUU, IGAD |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo para una Paz Duradera a través de un Cese de Hostilidades Permanente entre el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigré (Pretoria, 2022), Declaración Ejecutiva sobre las Modalidades de Implementación del Acuerdo para una Paz Duradera a través de un Cese de Hostilidades Permanente (Nairobi, 2022) |

Síntesis:

La región de Tigré (estado del norte de Etiopía, fronterizo con Eritrea y de mayoría de población tigré) es escenario de un conflicto armado desde 2020 y de intentos de iniciativas de diálogo. El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, desde su ascenso al poder, el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) y el liderazgo de la comunidad tigré, antaño núcleo duro de la coalición en el poder (EPRDF), vio erosionado su poder respecto a la toma de decisiones en el Gobierno. En paralelo, el conflicto entre Eritrea y Etiopía entre 1998 y 2000 tuvo su origen en las disputas fronterizas entre ambos países. Tigré, como estado fronterizo en el que se tienen que implementar decisiones relativas al acuerdo entre Eritrea y Etiopía, como la demarcación fronteriza y el estatus de localidad de Badme, se vio marginada del proceso de paz entre ambos Gobiernos. A eso se sumó la marginación progresiva del TPLF del poder central, creando un clima de tensión creciente que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara. Desde el inicio del conflicto armado en noviembre de 2020 la comunidad internacional, y en especial la UA, han intentado promover negociaciones de paz entre las partes, rechazadas por parte del Gobierno Federal. Entre marzo y agosto de 2022 estuvo vigente una tregua humanitaria, tras la cual se produjo una nueva escalada de la violencia. A finales de octubre de ese año se formalizaron negociaciones de paz en Pretoria (Sudáfrica) bajo los auspicios de la UA que condujeron a la firma de un acuerdo de cese de hostilidades en noviembre de 2022. Desde entonces se ha ido implementando el acuerdo de paz, proceso no exento de dificultades.

A pesar del inicio de la implementación del acuerdo de paz alcanzado el pasado 2 de noviembre de 2022 entre el Gobierno y las autoridades político-militares de la región de Tigré, persistieron las atrocidades contra la población civil, incluidas violencia sexual contra mujeres y niñas cometidas por las fuerzas de Eritrea y por las milicias paramilitares amhara Fano, según la ONU. Por su parte, el Gobierno Federal adoleció de un enfoque de

15 Amadou Jallow, "Senegal Gov't and Diakaye Faction of MFDC Sign Peace Deal", Foroyaa, 16 de mayo de 2023

justicia transicional hacia un conflicto que ha causado alrededor de 110.000 víctimas mortales desde 2020, según el UCDP, convirtiéndose en uno de los conflictos más graves de la actualidad. Tras la firma del acuerdo, se produjeron algunas violaciones iniciales del alto el fuego a finales de 2022 por parte de los cuerpos de seguridad etíopes y eritreos y de las milicias de la comunidad amhara contra el TPLF y contra la población civil, que pusieron de manifiesto las dificultades para implementar este acuerdo y la fragilidad de la situación.

A pesar del clima de violencia y de la grave situación humanitaria, el liderazgo político-militar de Tigré acordó e inició el desarme efectivo de sus combatientes –sin embargo, la desmovilización de los combatientes no empezó a hacerse efectiva hasta julio de 2023–; a finales de 2022 disolvió el gobierno regional surgido de las elecciones de 2020 (no reconocidas por el Gobierno Federal y que condujeron a la guerra); y el PMA inició la distribución de la ayuda humanitaria. El 12 de noviembre de 2022 las partes habían firmado en Nairobi la Declaración Ejecutiva sobre las Modalidades de Implementación del Acuerdo, en la que se contemplaba la entrega de las armas pesadas y la desmovilización de combatientes, el restablecimiento de servicios públicos en Tigré, la reactivación de la ayuda humanitaria y la retirada de todos los grupos armados y fuerzas extranjeras, en referencia a Eritrea, que combatieron junto al Ejército federal. A finales de diciembre de 2022 se había acordado y puesto en marcha la misión de observación de la UA (AU-MVCM). Eritrea progresivamente se fue retirando de la mayoría de ciudades de Tigré y en febrero de 2023 sus fuerzas prácticamente habían abandonado la región y sólo algunas unidades menores permanecían en posiciones estratégicas en áreas fronterizas, según el líder negociador del TPLF, Getachew Reda. Esa retirada se produjo conforme las autoridades político-militares de Tigré fueron entregando el armamento pesado en presencia de la misión de la UA. Entre diciembre y enero de 2023 fue mejorando ostensiblemente el acceso humanitario a la región, según fuentes de Naciones Unidas, y se restablecieron las comunicaciones, así como los vuelos comerciales. El 3 de febrero el primer ministro Abiy Ahmed se reunió con los líderes del TPLF por primera vez desde 2020. El TPLF estableció un comité para formar un gobierno de transición, y los líderes de Tigré a principios de marzo acordaron en una conferencia la composición de este gobierno de transición, llamado administración interina, boicoteada por tres partidos opositores de Tigré bajo la acusación contra el TPLF de monopolizar el poder. El 17 de marzo el TPLF escogió al exministro Getachew Reda para presidir la administración interina –Interim Regional Administration (IRA)–. El primer ministro Abiy Ahmed ratificó este nombramiento y días después el Parlamento

Se produjeron avances en la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Federal de Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré, aunque persistieron las atrocidades contra la población civil por parte de las fuerzas eritreas y de las milicias Fano

Federal retiró al TPLF de la lista de grupos terroristas y el Gobierno Federal también retiró los cargos contra sus líderes políticos y militares, requisito indispensable para formar la IRA. Getachew Reda nombró a los miembros del IRA el 5 de abril.

El comandante jefe de Tigré, Tadesse Worede, anunció a finales de julio de 2023 la desmovilización de 50.000 milicianos del TPLF e instó al Gobierno Federal a garantizar la retirada de las fuerzas de Eritrea y Amhara, aunque a finales de año todavía no se había hecho del todo efectiva. En septiembre el presidente interino, Getachew Reda, afirmó que el Gobierno Federal había aceptado dismantelar la administración ilegal de Amhara en las zonas en disputa en Tigré Occidental y Meridional, pese a los disturbios que estaban teniendo lugar en la región de Amhara, en parte motivados por el miedo a que el gobierno devuelva los territorios en disputa a Tigré, que actualmente están bajo control parcial de las autoridades regionales de Amhara. En agosto el ministro federal de Defensa había anunciado los planes gubernamentales de dismantelar la administración ilegal de Amhara sobre estas regiones. Estos territorios, en disputa entre las regiones de Tigré y Amhara, sufrieron durante la guerra de 2020-2022 escenas de limpieza étnica impulsadas por las milicias Fano y señaladas como crímenes contra la humanidad. Un año después de la firma del acuerdo de cese de hostilidades, el estatus de las dos regiones y de la población de Tigré desplazada de estas regiones continuaba estando en el limbo. En junio HRW denunció la persistencia de graves vulneraciones de derechos humanos y de actos de limpieza étnica por parte de las milicias Fano. Por último, la misión AU-MVCM se extendió hasta diciembre de 2023.

Otras decisiones y hechos pusieron de manifiesto la frágil evolución del proceso. En marzo el PMA y EEUU suspendieron la entrega de ayuda humanitaria a Tigré después de descubrir una estrategia para desviar la ayuda humanitaria, decisión que se extendió al resto de Etiopía a principios de junio, afectando a 20 millones de personas, una sexta parte de la población del país. En agosto el PMA reanudó la entrega de ayuda humanitaria. En paralelo, la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, con mandato de la ONU, publicó un informe en septiembre alertando de que seguían produciéndose graves atrocidades en Tigré perpetradas por tropas eritreas y por las milicias Fano. Concretamente, el informe destacaba que a pesar del alto el fuego entre el Gobierno y el TPLF, las tropas eritreas y la milicia Amhara seguían presentes en la región de Tigré y continuaban cometiendo atrocidades contra civiles, incluidas violaciones y violencia sexual contra mujeres y niñas. Desde su visita inicial en 2022, a la Comisión no se le

ha concedido acceso a Etiopía. A raíz de este informe y de la negativa de acceso a la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender el mandato de la Comisión en octubre, lo que significa que ya no existe ningún mecanismo independiente que investigue las atrocidades en Etiopía.

Género, paz y seguridad

A pesar de que el acuerdo de paz de 2022 incluía cuestiones relativas a la violencia de género perpetrada en el transcurso del conflicto, e instaba a las partes a condenar cualquier acto de violencia sexual y violencia de género, se continuaron cometiendo atrocidades y actos de violencia sexual por parte de las fuerzas eritreas y de las milicias Fano, tal y como detalló la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, cuyo mandato fue suspendido por el Consejo de Derechos Humanos.

La oficina de ONU Mujeres en Etiopía, en asociación con el Ministerio de Justicia a través del Grupo de Trabajo de Expertos en Justicia Transicional (TJ-WGE) y el Ministerio de la Mujer y Asuntos Sociales, organizó una consulta nacional de alto nivel con mujeres de diversos orígenes para discutir sobre opciones políticas sobre justicia transicional, con el objetivo de garantizar la participación de las mujeres en el desarrollo de una política de justicia transicional inclusiva y sensible al género para Etiopía. Al evento celebrado del 9 al 10 de junio de 2023, en la ciudad de Bishoftu, en Oromiya, asistieron sesenta mujeres participantes de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, organizaciones de derechos de las mujeres, defensoras de mujeres, grupos feministas, mujeres influyentes, profesoras universitarias, defensoras de derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación, proveedoras de servicios para sobrevivientes de violencia, representantes de la comunidad y agencias de la ONU.

| Etiopía (Oromiya) | |
|-----------------------------|--|
| Actores negociadores | Gobierno Federal, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA) |
| Terceras partes | IGAD, Kenya, Noruega y Tanzania |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de paz entre el Gobierno Federal y el OLF (2018) |

Síntesis:

Los intentos de acomodación de la comunidad oromo en el seno del estado federal etíope después de las amplias movilizaciones iniciadas en 2014 propiciaron el nombramiento del primer ministro Abiy Ahmed, miembro

de la comunidad oromo, así como las reformas políticas empujadas por él para promover la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz en 2018 con el Oromo Liberation Front –OLF, rebelión nacida en 1973–, lo que facilitó su retorno desde el exilio.¹⁶ No obstante, no han comportado una mayor autonomía para la región, tal y como esperaba el nacionalismo oromo. Abiy Ahmed se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de profundizar en el federalismo étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarlo en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces, la violencia ha ido en aumento. El Gobierno, apoyado por las milicias amhara Fano, lanzó una operación militar en abril de 2022 para desarticular el OLA. La escalada de los enfrentamientos durante la segunda parte del año 2022 coincidió con las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz en noviembre de ese año entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré. Desde entonces se han producido contactos entre el Gobierno y el OLA para promover un acuerdo de paz.

Tras la firma del acuerdo de paz del 2 de noviembre de 2022 entre el Gobierno y las autoridades político-militares de la región de Tigré y el inicio de su implementación, las autoridades federales escalaron las acciones bélicas contra el Oromo Liberation Army (OLA), brazo militar del Oromo Liberation Front (OLF), que había alcanzado previamente un acuerdo de paz con el Gobierno Federal en 2018. Las presiones del gobierno local de la región de Oromiya, así como el interés del OLA y de las autoridades federales en alcanzar algún tipo de tregua condujeron a varios contactos exploratorios indirectos en febrero de 2023 entre ambas partes, que manifestaron su interés en un cese de hostilidades. En medio del clima de violencia, en marzo el primer ministro, Abiy Ahmed, manifestó su compromiso en explorar un proceso de diálogo con el OLA y el 25 de abril se iniciaron conversaciones de paz en Zanzíbar (Tanzania) con la facilitación de Kenya –el OLA había exigido la mediación de una tercera parte–¹⁷ en nombre de la autoridad regional IGAD, y de Noruega.¹⁸ Aunque esta primera ronda culminó sin avances a principios de mayo, ambas partes manifestaron su compromiso en buscar una solución al conflicto.¹⁹ Desde entonces persistieron los enfrentamientos con graves consecuencias para la población civil. No obstante, en noviembre se hizo pública una segunda ronda negociadora iniciada a finales de octubre en Tanzania, bajo la mediación de la IGAD.²⁰ Fuentes diplomáticas en el anonimato destacaron su optimismo ante los avances del proceso negociador.

Género, paz y seguridad

Cabe destacar que la oficina de ONU Mujeres en Etiopía, en asociación con el Ministerio de Justicia a

16 Al-Jazeera, *Ethiopia signs deal with Oromo rebels to end hostilities*, 7 de agosto de 2018.

17 OLA Command, *Regarding Peace Negotiations*, OLF-OLA Press Release, 23 de abril de 2023.

18 Kombe, Charles, *Peace Talks Between Ethiopian Government, OLA Continue in Tanzania*, VOA, 27 de abril de 2023.

19 Paravicini, Giulia, *First round of peace talks between Ethiopia and Oromo rebels ends without deal*, Reuters, 3 de mayo de 2023.

20 Africanews, *Second round of talks between Ethiopian government and Oromo rebels*, 9 de noviembre de 2023.

través del Grupo de Trabajo de Expertos en Justicia Transicional (TJ-WGE) y el Ministerio de la Mujer y Asuntos Sociales, organizó una consulta nacional de alto nivel con mujeres de diversos orígenes para discutir sobre opciones políticas sobre justicia transicional, con el objetivo de garantizar la participación de las mujeres en el desarrollo de una política de justicia transicional inclusiva y sensible al género para Etiopía. Al evento celebrado del 9 al 10 de junio de 2023, en la ciudad de Bishoftu, en Oromiya, asistieron sesenta mujeres participantes de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, organizaciones de derechos de las mujeres, defensoras de mujeres, grupos feministas, mujeres influyentes, profesoras universitarias, defensoras de derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación, proveedoras de servicios para sobrevivientes de violencia, representantes de la comunidad y agencias de la ONU.

| Etiopía-Egipto-Sudán ²¹ | |
|------------------------------------|---|
| Actores negociadores | Etiopía, Egipto y Sudán |
| Terceras partes | UA, Banco Mundial (BM), EAU, UE y EEUU |
| Acuerdos relevantes | Tratado anglo-egipcio (1929) y su versión modificada, el Acuerdo entre la República de Sudán y la República Árabe Unida (Egipto y Siria) para el uso de las Aguas del Nilo (Cairo, 8 de noviembre de 1959); Iniciativa de la Cuenca del Nilo que abre el proceso del Acuerdo Marco de Cooperación (1999, firmado por 7 países y ratificado por 4 de ellos, en fecha de diciembre de 2023); Acuerdo Marco de Cooperación (Entebbe, 14 de mayo de 2010); Declaración de Jartum (también llamado Acuerdo del Nilo; Jartum, 23 de marzo de 2015). |

Síntesis:

El Nilo, el río más largo de África y el segundo de mayor longitud del mundo, ha sido epicentro de disputas durante décadas. En el centro del conflicto se encuentran Egipto y Etiopía, los dos principales actores regionales. La construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) por Etiopía en el cauce del Nilo Azul, afluente del Nilo en territorio etíope, desde 2011 ha exacerbado la tensión entre Etiopía, Egipto y Sudán. Egipto depende del Nilo para prácticamente todo su suministro de agua, por lo que su control es estratégico. Su principal afluente, el Nilo Azul, transcurre desde el lago Tana de Etiopía y se une al Nilo Blanco en Sudán, donde aporta alrededor del 85% del agua del Nilo principal. El 32% del territorio etíope se encuentra en la cuenca del Nilo, donde se concentra cerca del 40% de la población de Etiopía. En el caso de Sudán, el Nilo atraviesa todo el

país de sur a norte y proporciona alrededor del 77% del agua dulce del país.²² Los acuerdos del periodo colonial, favorables a Egipto y Sudán, ignoraron las necesidades del resto de países ribereños, incluida Etiopía. Los intentos de construir un marco multilateral de gestión han sido constantes, y en 1999 los 11 países de la cuenca crearon la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo era establecer un tratado multilateral. Egipto y Sudán participaron en el proceso pero rechazaron el acuerdo. En la última década se han promovido diferentes iniciativas, como en 2015, cuando los tres países firmaron la Declaración de Principios de la GERD, sin resultados hasta la fecha. En 2019 el Banco Mundial (BM) promovió contactos con observación de EEUU y entre 2020 y 2021 la UA facilitó conversaciones tripartitas, estancadas, con apoyo de la UE, momento en que el inicio del llenado del embalse precipitó la escalada de la tensión militarizada. El Cairo anunció que la GERD suponía una amenaza a su seguridad y alertó que podría desencadenarse un conflicto si la ONU no intervenía para evitarlo. En agosto de 2022 EAU facilitó conversaciones de paz en Abu Dhabi sin éxito.

Durante el año **Etiopía, Egipto y Sudán acordaron reanudar las conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD)**. Sin embargo, no se produjeron avances en las diferentes rondas de negociación celebradas. En los últimos años han proliferado las iniciativas de cara a reducir la tensión entre los tres países, sin embargo, las conversaciones tripartitas facilitadas por la UA permanecían estancadas desde 2021, y también fracasó la iniciativa de Abu Dhabi de 2022. La escalada de la tensión se había evidenciado nuevamente en 2022 cuando Etiopía anunció haber completado la tercera fase del llenado del embalse y el inicio de producción de energía hidráulica a través de la segunda turbina de la presa de forma unilateral, lo que provocó la reacción de Sudán y de Egipto. Este último amenazó a Etiopía con poner en marcha todas las acciones a su alcance para frenar este proceso y se comunicó en febrero y julio de 2023 con el Consejo de Seguridad de la ONU protestando por la decisión etíope y responsabilizando a Etiopía de cualquier impacto que esta situación pudiera tener en Egipto. No obstante, después de meses de parálisis, en los márgenes de la Cumbre de Estados Vecinos de Sudán celebrada en El Cairo el 12-13 de julio, con el objetivo de contribuir a la promoción de la paz en lo relativo a la inestabilidad que afecta Sudán, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, se reunieron el 13 de julio por primera vez desde la cumbre de Sochi de 2019. Hicieron un comunicado conjunto en el que acordaron reiniciar las conversaciones sobre el GERD, con el objetivo de llegar en cuatro meses a un acuerdo final sobre el llenado y la gestión de la presa.²³ El pacto se produjo después de que Etiopía

21 Véase La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto? en capítulo 5 (Escenarios de riesgo) en Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2021, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2021.

22 Nile Basin Initiative. Consultado el 10 de diciembre de 2023.

23 Joint Statement on Ethiopia – Egypt Relation, “Ethiopia, Egypt agree to finalize GERD filling, rules of operations agreement in four months”, Addis Standard, 13 de julio de 2023.

prometiera garantizar que Egipto y Sudán recibieran suficiente flujo de agua durante el cuarto llenado anual, que podría durar hasta septiembre. Sin embargo, en las cuatro rondas negociadoras celebradas desde entonces (27-28 de agosto, El Cairo; 23-24 de septiembre, Addis Abeba; 23-24 de octubre, El Cairo; 17-19 de diciembre, Addis Abeba) las partes fracasaron sin conseguir avances en las conversaciones. En septiembre, dos semanas después de la celebración de la primera ronda, el primer ministro etíope anunció haber llevado a cabo el cuarto y final llenado del embalse, decisión calificada como unilateral e ilegal y condenada por Egipto.

| Somalia | |
|-----------------------------|--|
| Actores negociadores | Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia |
| Terceras partes | ONU, IGAD, Türkiye, UA |
| Acuerdos relevantes | Hoja de Ruta para poner fin a la transición (2011), Acuerdo de Kampala (2011), Constitución Federal Provisional (2012), Declaración de Mogadiscio sobre el Foro Consultivo Nacional (2015), Acuerdo Electoral sobre Somalia (27 de mayo de 2021) |

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra la dictadura de Siad Barre y tres años después consiguió derrocarlo. Desde 1991, se han celebrado más de 15 procesos de paz para tratar de establecer una autoridad central con diferentes propuestas. Cabe destacar los procesos de Addis Abeba (1993), Arta (2000) y Mbagathi (2002-2004). El centralismo del Estado somalí había derivado en un elevado autoritarismo en tiempos de Barre, por lo que las diferentes propuestas pretendían establecer un Estado que no concentrara el poder, fórmula ampliamente rechazada por la sociedad somalí. Sin embargo, algunos clanes y señores de la guerra rechazaron el modelo descentralizado o federal porque representaba una amenaza a su poder. El poder de algunos señores de la guerra que han convertido el conflicto en su modus vivendi, la representatividad y los equilibrios de cuotas de poder para configurar el futuro Gobierno entre los diferentes actores y clanes que componen la estructura social somalí agravados y enfrentados durante la dictadura de Siad Barre y tras años de guerra, la injerencia de Etiopía y Eritrea y la postura errática de la comunidad internacional han dificultado la resolución del conflicto. El ascenso del Islam político como alternativa de poder a través de los tribunales islámicos y la internacionalización del conflicto con la irrupción de combatientes extranjeros en el brazo armado de los tribunales, al-Shabaab, así como la invasión etíope y el papel de EEUU en la lucha contra el terrorismo, han contribuido a dificultar la situación. El Gobierno Federal de Transición, surgido del proceso de paz de Mbagathi (2004), finalizó su andadura en 2012 dando paso al Gobierno Federal. No obstante, las acciones del Gobierno Federal y el Parlamento, marcados por su ineficacia y corrupción, y su renovación electoral han sido motivo de disputa y negociaciones sucesivas entre los estados federados y entre sectores opositores en el seno de los respectivos estados así como entre los diferentes clanes que componen la estructura social del país.

No trascendieron contactos entre el Gobierno Federal y el grupo armado al-Shabaab en paralelo a la continuación de la ofensiva militar contra al-Shabaab y persistieron las consecuencias de la grave sequía y la hambruna que afecta a numerosas partes del país. El Gobierno Federal continuó insistiendo en su política de aproximación hacia los estados miembros de la federación, y durante el año se celebraron varias reuniones del Consejo Consultivo Nacional (NCC por sus siglas en inglés), órgano que reúne al Gobierno Federal y a los estados miembros, y se produjeron algunos avances en el reparto de poder en el seno de la federación, en paralelo al fortalecimiento de las operaciones militares contra al-Shabaab. En enero, no obstante, Puntlandia decidió suspender las relaciones con Mogadiscio y anunció que operaría como una entidad autónoma hasta que la constitución provisional estuviera finalizada, y que hasta entonces solo colaboraría con Mogadiscio en lo concerniente a cuestiones humanitarias. Paralelamente, se desencadenaron graves tensiones y enfrentamientos en diciembre en el estado de Suroeste en torno a la disputa sobre la extensión del mandato del presidente regional, Lafta-Gareen. El presidente de la Cámara Baja federal, Adan Madobe, organizó una conferencia de paz en Baidoa, entre el presidente regional y los líderes opositores en enero a la que se sumó el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y que concluyó positivamente en febrero con la oposición aceptando la extensión por un año del mandato del presidente regional Lafta-Gareen y la celebración de elecciones en la región en enero de 2024. En posteriores reuniones del NCC todos los estados miembros acordaron extender sus respectivos mandatos presidenciales por un año y las cámaras alta y baja federales se comprometieron a examinar una enmienda constitucional para prolongar el mandato de diputados y presidente por un año, a lo que la oposición se oponía.

Género, paz y seguridad

La situación en Somalia continuó siendo muy grave y se produjeron retrocesos en términos de violencia de género y de aplicación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, tal y como destacó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en febrero, quien reveló una situación devastadora. El incremento de la violencia en el país y la actual sequía, que repercutía en desplazamientos forzados y en la inseguridad alimentaria de la población, expuso al país a un mayor riesgo de hambruna -la última hambruna declarada en Somalia, en 2011, mató a un cuarto de millón de personas- y exacerbó la violencia de género.

Bahous señaló que en Somalia no se alcanzó la cuota del 30% para las mujeres en las elecciones ni en el Gobierno, la representación de las mujeres disminuyó, la violencia sexual aumentó y el Parlamento aún no había aprobado el proyecto de ley sobre delitos

sexuales adoptado por unanimidad por el Consejo de ministros hace cinco años. En cambio, los oponentes a esa ley presionaron por una legislación alternativa que legalice el matrimonio infantil, omita la edad de consentimiento, reduzca los tipos de pruebas admisibles y elimine los derechos de los sobrevivientes. Bahous destacó que las mujeres somalíes invitadas a informar ante el Consejo de ministros habían advertido de esta situación, pero no se tomaron las medidas oportunas. Por el contrario, las tasas de violencia sexual registraron un aumento alarmante desde 2020. Se duplicaron en comparación con 2019, y siguieron aumentando, ya que la peor sequía en muchas décadas tuvo un impacto devastador en todos los somalíes, y las mujeres y las niñas fueron impactadas de manera desproporcionada. La impunidad seguía siendo generalizada, y los grupos armados, en especial al Shabaab, continuaron secuestrando a mujeres y niñas, obligando a las familias a darles a sus hijas para que se casen y ocupando hospitales y salas de maternidad, así como silenciando y amenazando a las voces locales que denuncian esta situación, como fueron los casos de las ejecuciones de la joven parlamentaria Amina Mohamed Abdi y de la asesora en asuntos de mujeres en la oficina del Primer Ministro Hibaq Abukar, entre otras mujeres activistas y mujeres que trabajan en la política local y nacional, así como de la sociedad civil.

| Somalia-Somalilandia | |
|-----------------------------|--|
| Actores negociadores | Gobierno Federal de Somalia, República de Somalilandia |
| Terceras partes | Türkiye, Noruega |
| Acuerdos relevantes | |

Síntesis:

El territorio de la actual autoproclamada República de Somalilandia recibe su nombre en el momento en que el Imperio Británico tomó el control de la administración egipcia en 1884, tras firmar sucesivos tratados con los sultanes somalíes gobernantes en la región, estableciendo un protectorado denominado Somalilandia Británica. En 1960, cuando el protectorado se independizó de Gran Bretaña, se llamó Estado de Somalilandia. Cuatro días después, el 1 de julio de 1960, Somalilandia se unió a la Somalia italiana, conformando el Estado de Somalia. A mediados de la década de 1980, surgieron en todo el país movimientos de resistencia apoyados por Etiopía, en especial el Somali National Movement (SNM), surgido en Somalilandia, lo que condujo a la Guerra de Independencia de Somalilandia, y que desembocó en la caída del régimen de Siad Barre y el inicio de la guerra civil somalí en 1991 y que dura hasta la actualidad. El 18 de mayo de 1991, los clanes del norte proclamaron la independencia de la República de Somalilandia, que comprende las regiones administrativas de Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag y Sool. Somalilandia no está reconocida internacionalmente, pero posee constitución (2001), moneda y gobierno propios, además de mayor estabilidad política que Somalia, ayudada por la influencia de su clan dominante, los Issaq (80% de la población). Las elecciones multipartidistas de 2005 contaron con observación internacional y significaron un empuje para el reconocimiento internacional como estado soberano, aunque sigue siendo limitado. La independencia

de Somalilandia no ha sido reconocida oficialmente por ningún Estado miembro de la ONU ni por ninguna organización internacional, cediendo el liderazgo a la UA en la decisión. La UA ha estado considerando la solicitud de Somalilandia de ser miembro del bloque y su abordaje como un “caso excepcional”, aunque la misma UA ha manifestado su temor a que el reconocimiento formal de Somalilandia aliente a otros movimientos secesionistas en el continente africano. Se han celebrado más de 15 procesos de paz en Somalia que han incluido el contencioso de Somalilandia. En la Conferencia internacional de Londres de 2012 actores de la comunidad internacional propusieron la celebración de negociaciones para resolver la disputa entre Somalia y Somalilandia. Desde entonces, se celebraron seis rondas de negociación (Londres, Dubai, Ankara, dos en Estambul y Djibouti). La séptima (Estambul III) fracasó en enero de 2015 y se interrumpió el proceso. Türkiye ha estado alentando intentos de aproximación entre las partes desde entonces.

Tras la toma de posesión de Hassan Sheikh Mohamud en mayo de 2022 como presidente de Somalia, este manifestó su voluntad de contribuir a la reconciliación entre los diferentes estados federados y, sobre todo, conseguir reabrir un proceso de negociación política que condujera a la reconciliación entre Somalia y la autoproclamada República de Somalilandia y a su incorporación en el seno de la federación. Tras más de tres décadas de bloqueo y de múltiples iniciativas frustradas para aproximar a las partes, el último proceso se había visto interrumpido en 2015. **A finales de 2022 se relanzaron los contactos y las iniciativas internacionales, que culminaron con una reunión en diciembre de 2023 entre ambos presidentes en Djibouti.**

En diciembre de 2022 una delegación de Türkiye y de Noruega se había reunido con el presidente Hassan Sheikh Mohamud y posteriormente con el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, con el objetivo de reanudar las conversaciones entre Somalia y Somalilandia y promover la reconciliación entre ambas entidades. El presidente Mohamud manifestó a la delegación su voluntad de poner en marcha este proceso. Por su parte, el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, también manifestó a la delegación turco-noruega su voluntad de celebrar dicho proceso pero señaló que antes debían darse algunas condiciones, principalmente el cumplimiento de acuerdos previos y la existencia de un equipo de mediación internacional del proceso. Muse Bihi señaló la necesidad de establecer un secretariado independiente que coordinara las iniciativas de mediación. Además, añadió que los equipos representantes de cada gobierno deberían fijar claramente los puntos del orden del día de la agenda en presencia de este secretariado independiente. La delegación que se reunió con el presidente Mohamud estaba formada por el embajador turco Mehmet Yilmaz, el oficial noruego de la embajada Haakon Svane, el representante especial turco Aykut Kumbarolu y la representante especial noruega Heidi Johansen.

Posteriormente, en 2023 el presidente de Somalia nombró el 1 de abril al ex presidente del estado de Galmudug y ministro federal del Interior, Abdikarim

Hussein Guled, enviado especial para Somalilandia para “garantizar la unidad y la solidaridad del pueblo somalí”. Por su parte, el 18 de abril, el presidente de Somalilandia, Muse Bihi, correspondió nombrando a la ex ministra de Somalilandia, Edna Adan Ismail, enviada para las conversaciones entre Somalilandia y Somalia. Entre los meses de junio y octubre el enviado especial del Gobierno Federal para el diálogo entre Somalia y Somalilandia, Abdikarim Hussein Guled, celebró una serie de reuniones consultivas con diferentes actores políticos y sociales. Finalmente, cabe destacar que las diferentes iniciativas y contactos exploratorios culminaron con una reunión entre los presidentes de Somalia y Somalilandia entre el 28 y el 29 de diciembre en Djibouti. La delegación de Somalilandia estuvo compuesta por el presidente Bihi y los ministros Saad Ali Shire (Desarrollo Económico); Ahmed Mohamed Diriye (Planificación); Mohamed Kahin Ahmed (Interior); Ahmed Adan Buxane (Educación); además de la enviada especial de Somalilandia para las conversaciones de paz, Edna Adan. Por su parte, la delegación de Somalia estuvo compuesta por el presidente Mohamud y los ministros Ahmed Moalim Fiqi (Interior); Jabril Abdirashid (Comercio); así como el enviado especial para las negociaciones con Somalilandia, Abdikarim Hussein Guled; además del país anfitrión, Djibouti, cuyo presidente Ismail Omar Guelleh ha desempeñado numerosos intentos de buenos oficios y facilitación del diálogo entre las partes en las últimas dos décadas. En la reunión se discutieron una amplia variedad de temas, incluido el alivio de la deuda, la gestión de proyectos nacionales, la asignación de recursos, las crisis y las recientes tensiones en el Mar Rojo, y acordaron reanudar las conversaciones de paz entre ambas administraciones.

No obstante, esta histórica reunión se vio ensombrecida por el anuncio el 1 de enero por parte de Etiopía y de Somalilandia de la firma de un memorando de entendimiento²⁴ entre ellos que desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas entidades y Somalia. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía

debía evaluar esa petición, y prometió “una evaluación en profundidad para adoptar una posición respecto a los esfuerzos de Somalilandia por ser reconocida oficialmente”.²⁵ El acuerdo gira en torno al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Etiopía históricamente ha buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti. El acuerdo también incluía arrendar terreno de Somalilandia para construir una base naval. A cambio, Somalilandia recibiría el valor equivalente en forma de acciones de la aerolínea Ethiopian Airlines. En un comunicado hecho público en X (antiguo Twitter), la oficina del primer ministro etíope celebró el acuerdo pero no hizo ninguna mención al reconocimiento de la independencia de Somalilandia, solo un compromiso a avanzar en intereses mutuos sobre la base de reciprocidad. Este anuncio provocó una nueva crisis diplomática entre Somalia, Somalilandia y Etiopía que adquirió dimensiones regionales, por la política de alianzas regionales de Etiopía y Somalia.

Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Se convocaron manifestaciones en Somalia, y en la propia Somalilandia el acuerdo fue recibido con protestas y la dimisión del ministro de Defensa. EEUU, UE, UA, IGAD y la Liga Árabe, entre otros, hicieron un llamamiento al diálogo y a reducir la tensión. La organización regional IGAD convocó de urgencia una reunión extraordinaria el 18 de enero para abordar las tensiones diplomáticas, a la que Etiopía anunció que no podría asistir por solapamiento con otra cumbre. La reunión convocada por Djibouti, que ocupa la presidencia rotatoria de la IGAD, coincidía con la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Según diversos análisis,²⁶ aunque es improbable una confrontación entre ambos países, debido al poder militar etíope frente al somalí, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos países y tener consecuencias en la guerra contra el grupo islamista somalí al-Shabaab, ya que un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría derivar en presiones hacia la presencia etíope en Somalia que acabasen con su retirada de la misión de la UA en el país, ATMIS. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes de tropas en la misión de la UA en Somalia.

24 Faisal Ali, *Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports*, The Guardian, 1 de enero de 2024.

25 David Ehl, *Polémico acuerdo: salida al mar a cambio de reconocimiento*, DW, 4 de enero de 2024.

26 Alemayehu Weldemariam, *Ethiopia's deal with Somaliland upends regional dynamics, risking strife across the Horn of Africa*, The Conversation, 13 de enero de 2024.

Género, paz y seguridad

Cabe destacar que la delegación que se reunió en diciembre de 2022 con el presidente Mohamad estaba formada por el embajador turco Mehmet Yilmaz, el oficial noruego de la embajada Haakon Svane, el representante especial turco Aykut Kumbarolu y la representante especial noruega Heidi Johansen. Además, el nombramiento de la ex ministra de Sanidad y de Exteriores de Somalilandia, Edna Adan –esposa del primer ministro Mohamed Ibrahim Egal durante el régimen de Siad Barre, quien posteriormente fue el presidente de Somalilandia entre 1993 y 2002–, como enviada de Somalilandia al proceso, puede suponer un importante impulso al proceso. Edna Adan es considerada un símbolo en la lucha por los derechos de las mujeres en Somalia, y es a su vez presidenta de la UNPO, la organización de naciones sin Estado del mundo (desde 2022). Edna Adan ha sido laureada con numerosos premios, entre ellos el Templeton Prize en junio de 2023 por su labor en la construcción de la paz y su lucha contra la mutilación genital femenina en el Cuerno de África desde el hospital que lleva su nombre en Hargeysa, la capital de Somalilandia. En este sentido, este premio puso en valor el tradicional papel de las organizaciones de mujeres somalíes en el impulso de iniciativas de construcción de paz y de diálogo con el objetivo de intentar superar las divisiones en torno al conflicto en Somalia.

Grandes Lagos y África Central

| Chad | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Proceso de Doha: Consejo Militar de Transición, 52 grupos armados (entre los que destacan el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT), el Consejo de Mando Militar para la Salvación de la República (CCSMR), la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD) y la Unión de Fuerzas de Resistencia (UFR) DNIS: Consejo Militar de Transición, organizaciones de la sociedad civil, 34 de los 52 grupos armados firmantes del proceso de Doha. Los 18 grupos armados no firmantes del acuerdo de Doha formaron el Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), entre ellos el FACT y el CCSMR |
| Terceras partes | Qatar; UA y ONU, entre otros; Comunidad de Sant'Egidio, CEEAC |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de Doha por la Paz y la Participación de los Grupos Político-Militares en el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (2022), Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (2022) |

Síntesis:

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un amplio, complejo e interrelacionado abanico de retos

y elementos de fragilidad e inestabilidad en las últimas décadas, aunque también es escenario de intentos de diálogo y negociación política. El clima de inestabilidad se agravó con la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado por parte de un consejo militar que instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente, suspendió la Constitución y la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional. El Consejo Militar de Transición (CMT) se comprometió a promover un diálogo nacional en diciembre de 2021, en el que se pretendía que participaran las diferentes insurgencias activas en el país. En 2022 se celebró un proceso de paz en Doha (Qatar) bajo mediación qatarí en el que se alcanzó un acuerdo el 7 de agosto con 34 de las 52 insurgencias, lo que dio paso, finalmente, a la celebración del Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) entre el 20 de agosto y el 8 de octubre, con la participación en el DNIS de diferentes actores, incluyendo los firmantes del acuerdo de Doha. El proceso de paz de Doha y el DNIS concluyeron con la prolongación del mandato del CMT por otros 24 meses bajo un nuevo Gobierno, calificado de unidad nacional, y la continuidad de la presidencia de Mahamat Déby, que podrá presentarse a las elecciones de 2024, lo que ha supuesto la perpetuación de la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021. Las históricas movilizaciones de octubre de 2022 coincidiendo con el fin de la transición –que había sido prorrogada por el DNIS– fueron fuertemente reprimidas, causando numerosas víctimas mortales, lo que evidenció la deriva autoritaria del Gobierno y el silenciamiento de la oposición política y social.

El Acuerdo de paz de Doha para la Paz y la Participación de los Movimientos Político-Militares en el diálogo nacional firmado en agosto de 2022 y el posterior Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano de 2022 comportaron la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) por un periodo de 24 meses. El gobierno de transición, remodelado en octubre de 2022 bajo la tutela del presidente Mahamat Déby – que podrá presentarse a las elecciones previstas para noviembre de 2024–, continuó llevando a cabo medidas para afianzarse en el poder, según diversos análisis. El Gobierno puso en marcha el comité organizador del referéndum constitucional, una de las recomendaciones derivadas del proceso de diálogo. El gobierno de transición continuó en 2023 con los preparativos para la celebración de la consulta constitucional y el 7 de noviembre anunció la celebración del referéndum para el 17 de diciembre. El referéndum fue boicoteado por varias figuras de la oposición y de la sociedad civil – entre ellas el líder de la coalición opositora Plataforma republicana, el antiguo ministro Sidick Abdelkereim Haggar– que continuaron denunciando que el proyecto de Constitución se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal, la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. Un grupo de 15 partidos opositores denunciaron en septiembre el proceso de elaboración del censo.

Por otra parte, diversos análisis también señalaron que Déby había fracasado en la puesta en marcha del

comité que debía llevar a cabo el seguimiento de las resoluciones de las conversaciones de paz de Doha y no estaba implementando las recomendaciones del diálogo nacional. Así lo denunció también uno de los principales firmantes del acuerdo de Doha, el colíder del grupo armado UFR, Timan Erdimi. Su hermano, Tom Erdimi, fue incluido como ministro del gobierno de transición. Timan Erdimi destacó que era necesario que la comunidad internacional fuera testigo de la no implementación de los acuerdos. Entre junio y julio Déby retiró a un centenar de generales y promovió un número similar de jóvenes oficiales próximos a él al rango de general (alrededor de 500 generales en el país, una de las cifras más altas a nivel mundial en proporción al Ejército). En paralelo, el presidente de la Comisión de la UA, el chadiano Moussa Faki, reiteró que los militares chadianos no deberían poder presentarse a las elecciones de 2024 y deberían entregar el poder a los civiles. A principios de julio el Gobierno de transición estableció la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, en consonancia con el Acuerdo de Doha, así como también estableció otra comisión sobre reconciliación nacional y cohesión social. El 16 de octubre, las autoridades de transición declararon que se había dado comienzo al proceso de desarme, desmovilización y reintegración, según señaló la ONU en noviembre.

El Gobierno de transición llevó a cabo diversos indultos y decretó una amnistía de los responsables de las protestas antigubernamentales del 20 de octubre de 2022 así como de diversos actores político-militares en diferentes fases. En diciembre de 2022 la fiscalía del país había condenado a 262 personas arrestadas durante las protestas y decretado la libertad de otras 139 personas en un juicio que no contó con las garantías procesales según estándares internacionales. En febrero de 2023 se celebró el juicio de alrededor de 400 miembros del FACT capturados en abril de 2021 durante los combates que condujeron a la muerte del presidente Idriss Déby, y que fueron sentenciados a cadena perpetua. El presidente Mahamat Déby indultó a 380 de ellos, así como a otros 259 activistas encarcelados por su participación en las movilizaciones de octubre de 2022. El líder del FACT, Mahamat Mahdi Ali, sentenciado junto a otros *in absentia*, no recibió el indulto. En julio otras 110 personas fueron indultadas por su participación en las movilizaciones del 20 de octubre de 2022.

Las autoridades permitieron el regreso de Succès Masra, líder del partido opositor Les Transformateurs, el 3 de noviembre a Chad después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas –centenares, según la oposición– de víctimas mortales. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición. El 5 de noviembre, las autoridades

liberaron a 72 miembros de Les Transformateurs que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N'Djamena, e instó a la reconciliación con los gobernantes militares. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. **A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de las movilizaciones de octubre de 2022.**

En paralelo, los miembros de la coalición opositora Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), compuesta por los 18 grupos armados que no firmaron el acuerdo de Doha (entre ellos, el FACT), se reunieron en Roma bajo los auspicios de la Comunidad de Sant' Egidio entre el 6 y el 9 de marzo de 2023 para discutir en torno a la situación política y de seguridad en el Chad, y señalaron su disposición a comprometerse en llevar a cabo negociaciones con las autoridades de transición con el apoyo de una mediación neutral e imparcial, aunque no recibieron respuesta del Gobierno de transición. En marzo una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) visitó el país, reuniéndose con representantes de la oposición y de la sociedad civil, como parte de su facilitación de la transición, aunque el CPCR desdeñó su papel mediador debido a su apoyo a las conclusiones del DNIS, calificado de farsa por parte de la sociedad civil y de la oposición político-militar.

Por otra parte, el grupo armado FACT rompió el alto el fuego unilateral que mantenía desde abril de 2021 como consecuencia de la ofensiva iniciada en agosto por parte del Ejército Nacional de Libia y las Fuerzas Armadas chadianas en la región de Tibesti (norte). Aunque el Gobierno no había acordado ningún alto el fuego con el grupo, sí que había liberado a cientos de sus miembros de cara a facilitar su participación en el proceso de Doha, y también tras la sentencia de marzo. Esta ofensiva debilitó al grupo armado hasta el punto de que el secretario general del FACT, Mahamat Barh Béchir Kendji, se entregó a principios de noviembre a las autoridades chadianas junto con centenares de combatientes. El 9 de noviembre el FACT acusó de traición a Kendji.

Género, paz y seguridad

Con respecto a la participación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género, cabe señalar que las mujeres constituyeron algo menos del 30% del nuevo Gobierno de transición formado en octubre de 2022. En el proceso de paz de Doha solo hubo una mujer representante por parte de los actores presentes, según Naciones Unidas. Asimismo, organizaciones de mujeres y jóvenes participaron en el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) pero sus posiciones no tuvieron

presencia en las conclusiones del DNIS y se desconoce si hubo presencia de mujeres en el comité organizador del referéndum. Cabe destacar que el Gobierno presentó a principios de año su Plan de Acción Nacional para promover la agenda de mujeres, paz y seguridad, cuya elaboración contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Cooperación Suiza y la Cooperación Española. La ministra de Género y Solidaridad Nacional, Amina Priscille Longoh, explicó que el proceso de elaboración del PAN 1325 comenzó en 2019 con un mapeo de prioridades, consultas locales y sectoriales; paso previo al inicio de la redacción del documento, su presupuesto, su parte técnica y política. La ministra agradeció a los socios el apoyo, así como al comité interministerial responsable de redactar el documento, que fue presentado por la coordinadora del comité y secretaria general del ministerio de Género, Familia y Solidaridad de Chad, Appoline Moudalbaye. Cabe añadir que como parte del programa “Apoyo a la transición democrática en Chad”, financiado por la UE, IDEA Internacional Chad organizó un taller nacional de capacitación en octubre sobre el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres con miras a alentar a las mujeres a presentarse como candidatas en las elecciones de 2024, al que asistieron cincuenta mujeres de partidos políticos que apoyan la transición, de partidos políticos de oposición, de organizaciones de la sociedad civil y mujeres ejecutivas del Ministerio de Estado para la Mujer, la Protección de la Infancia y la Solidaridad Nacional y del Ministerio de Reconciliación Nacional y Cohesión Social.

| RCA | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka |
| Terceras partes | Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán |
| Acuerdos relevantes | Pacto republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015), Acuerdo de Cese de Hostilidades (junio de 2017), Hoja de Ruta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Libreville, julio de 2017), Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de Khartoum (Bangui, 6 de febrero de 2019) |

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la

celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa (“antibalaka”), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en mayo de 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones en 2015 y 2016 que pusieron fin a la fase de transición. No obstante, la ventana de oportunidad tras las elecciones fue temporal y no se consiguieron generar las condiciones para iniciar un proceso de paz inclusivo que pudiera facilitar el desarme y la reconciliación, lo que ha comportado la persistencia de la inseguridad y la violencia. Las diferentes iniciativas regionales han confluído en un único marco negociador, la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación puesta en marcha a finales de 2016, bajo los auspicios de la UA y de la CEEAC con el apoyo de la ONU, que estableció en julio de 2017 la Hoja de Ruta de Libreville, y que contribuyó a alcanzar el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de febrero de 2019, en fase de implementación. Sin embargo, en diciembre de 2020 los representantes de seis de los grupos armados más poderosos del país, entre los cuales los principales firmantes del acuerdo de paz de 2019 -las facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, una facción del FPRC, el MPC y la UPC- denunciaron el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno y se retiraron del proceso y crearon la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), tras lo cual se produjo un reinicio de las hostilidades en el conjunto del país, que se ha complejizado por la irrupción de la empresa de seguridad privada rusa Wagner.

Durante el año continuó lentamente la implementación del Acuerdo Político de 2019 con los grupos armados que no habían abandonado el marco de negociación.

Continuaron los enfrentamientos en el país, en especial en el este, en un contexto de escasa presencia de los cuerpos de seguridad gubernamentales y de persistencia de operaciones por parte de la empresa de seguridad privada rusa Wagner contra los principales grupos armados afiliados a la principal coalición rebelde conocida como Coalición de Patriotas para el Cambio (CPC), causando el desplazamiento forzado de miles de personas y denuncias de graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de todos los actores implicados en el conflicto.

La situación política estuvo dominada por el referéndum constitucional que se celebró el 30 de julio. La séptima república se instauró formalmente en la República Centroafricana al promulgarse la nueva Constitución el 30 de agosto. El Gobierno declaró que los cambios constitucionales respondían a la demanda popular y permitirían el desarrollo nacional. La oposición política y diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas y varios grupos han criticado

la nueva Constitución, algunas de cuyas disposiciones siguieron generando controversia, como las relativas a los requisitos para presentarse a las elecciones. Algunos grupos armados y formaciones opositoras, como la coalición armada CPC, pidieron a la población del país que boicoteara el referéndum. La coalición civil opositora Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución, algunas organizaciones de la sociedad civil y varios grupos armados no signatarios del Acuerdo Político de 2019 impugnaron los resultados. En su discurso a la nación de 31 de agosto, el presidente Touadera reiteró su voluntad de llevar adelante el proceso de paz y la transformación política del país asentándolo en la nueva Constitución que se había promulgado la víspera, e invitó expresamente a los grupos armados a que se reincorporaran al proceso de paz. Una misión de observación de la organización regional CEEAC señaló que las condiciones del proceso de consulta habían sido satisfactorias.

La nueva Constitución, más presidencialista y que incorpora cambios que podrían interpretarse como retrocesos en términos de la independencia entre los poderes del Estado, amplió de cinco a siete años los mandatos de presidente y parlamento, eliminó la limitación de mandatos sucesivos, retiró el control parlamentario de la firma de contratos mineros –esta prerrogativa estaría en manos del presidente–, eliminó el Senado –que había sido establecido por la Constitución de 2015 pero nunca había llegado a crearse– e instauró la creación de una cámara de líderes tradicionales, entre otras cuestiones. La MINUSCA siguió apoyando las iniciativas de mediación y reconciliación del Gobierno en el plano local, entre otras cosas facilitando reuniones de los mecanismos prefecturales de vigilancia del Acuerdo Político alcanzado en 2019. Por otro lado, continuó avanzando muy lentamente el proceso de DDR, y alrededor de 1.000 combatientes terminaron el proceso de DDR entre julio de 2022 y septiembre de 2023. Hasta el 1 de octubre, se habían disuelto y desarmado y desmovilizado por completo seis grupos armados y dos facciones de otros grupos signatarios del Acuerdo Político de 2019.

Género, paz y seguridad

La presencia de mujeres en los comités locales de paz y reconciliación, que había aumentado desde la firma del Acuerdo Político en 2019, era en octubre del 35%, según la ONU. La MINUSCA promovió una mayor participación de las mujeres en el proceso de paz, para lo que, por ejemplo, el 20 de junio reunió en Bangui a más de 60 mujeres líderes de la sociedad civil con el propósito de elaborar un plan de acción dirigido, entre otras cosas, a mejorar la interacción con instancias políticas y líderes de grupos armados. El NGO Working Group on Women, Peace and Security remarcó en noviembre que el propio Mohamed Ag Ayoya, representante especial adjunto del secretario general de la ONU en el país y coordinador humanitario de la MINUSCA, había señalado en

septiembre que la crisis que padece el país –en la que se constaban graves violaciones de los derechos humanos que incluían múltiples formas de violencia de género, cambio climático, desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria para más de la mitad de la población– debería calificarse no solo como una crisis crisis humanitaria, sino una “crisis de protección y género”. La violencia de género, incluida la violencia sexual, aumentó, exacerbada por el conflicto y la crisis climática, perpetrada no solo por actores armados, sino también por miembros de las familias a escala masiva. Por otra parte, el referéndum constitucional de julio de 2023, a su vez, aprobó una serie de cambios que en lo concerniente al Tribunal Constitucional, implicaron la supresión del requerimiento de que en su composición hubiera igual número de hombres que de mujeres, con las consecuencias que se derivan en términos de la aplicación de una justicia sensible al género.

| RDC | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado M23, grupos armados del este del país, oposición política y sociedad civil |
| Terceras partes | UA, SADC, CIRGL, EAC, UE, ONU, OIF, EEUU, Angola, Qatar |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de Sun City, Acuerdo de Pretoria y Acuerdo de Luanda (2002); Acuerdo Global e Inclusivo sobre la Transición (2002); Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para RDC y la Región (2013), Acuerdo de Paz Inclusivo y Global en la RDC (2016), Acuerdo de Luanda (2022) |

Síntesis:

Las demandas de democratización en los años noventa acabaron en una sucesión de rebeliones culminando con el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila entre 1996 y 1997 contra Mobutu Sese Seko. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003) por la participación de una decena de países de la región y numerosos grupos armados. La firma de un alto el fuego en 1999 y diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno de transición donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política y los principales actores insurgentes, en un acuerdo de reparto del poder político. La firma de los acuerdos de paz con la insurgencia no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares tutsis del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, argumentando las amenazas y marginación hacia su comunidad, y organizaron una nueva rebelión, llamada Movimiento 23 de Marzo, promovida por Rwanda en 2012. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada y parte de sus miembros huyeron a Rwanda y Uganda. A pesar de ello persistió el clima de inestabilidad y violencia, y a finales de 2021 el M23 reinició su ofensiva. En 2022 la EAC activó dos procesos para promover la paz en la región: un proceso de diálogo con grupos armados del este de RDC en Nairobi, y el proceso de Luanda, entre RDC y Rwanda, así como el envío de una misión militar para hacer frente a los grupos que no aceptaran el proceso de Nairobi, como el M23.

Durante el año fueron creciendo las presiones internacionales para que Rwanda interrumpiera su apoyo al grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), y continuaron llevándose a cabo iniciativas regionales e internacionales para promover un diálogo entre RDC y Rwanda. En paralelo, en octubre se agravaron los enfrentamientos en el este de RDC principalmente protagonizados por el M23. La violencia y escalada de los enfrentamientos tuvo lugar en medio de la campaña electoral gravemente afectada por un clima de violencia política que culminó con las elecciones del 20 de diciembre de 2023 en las que obtuvo la victoria Félix Tshisekedi en unos comicios plagados de irregularidades y acusaciones de fraude.²⁷ Sin embargo, las iniciativas conocidas como el proceso de Luanda –el diálogo entre RDC y Rwanda por su apoyo al grupo M23, en el marco del cual se alcanzó en 2022 el acuerdo de Luanda y un alto el fuego por parte del M23 que no fue respetado– y el proceso de Nairobi –iniciativas de diálogo intercongolés entre Gobierno, sociedad civil y grupos armados, entre ellos el M23– permanecieron estancadas durante el año 2023.²⁸ En enero de 2023 Qatar intentó dar continuidad y apoyo a los esfuerzos de Angola para promover un diálogo político entre RDC y Rwanda, pero la reunión directa entre los presidentes de ambos países, prevista para el 23 de enero se pospuso por ausencia congoleña. Las cumbres de la EAC del 4 y el 17 de febrero fracasaron en sus intentos de alcanzar un alto el fuego. No fue hasta marzo que se consiguió fraguar un frágil alto el fuego, de la mano del presidente de Angola, João Lorenço.

A principios de marzo Lorenço anunció un alto el fuego entre el M23 y las FARDC que entraría en vigor a partir del 7 de marzo, coincidiendo con el despliegue de la presencia militar regional de la EAC (sin mandato de uso de la fuerza), compuesta por fuerzas burundesas, ugandesas y sursudanesas. Dicho alto el fuego fracasó a los pocos días,²⁹ aunque el grupo armado M23 llevó a cabo una retirada estratégica y una reducción de sus actividades conforme se fue completando el despliegue de la fuerza de la EAC, que culminó en abril. Entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, aunque este grupo continuó combatiendo contra grupos armados locales progubernamentales por el control del territorio en la provincia de Kivu Norte.

Durante este periodo se celebraron diferentes iniciativas regionales para intentar relanzar las negociaciones de

La escalada de la ofensiva del grupo M23 en octubre, apoyado por Rwanda, provocó un incremento de la tensión entre RDC y Rwanda y las iniciativas regionales fracasaron en sus intentos para promover una salida negociada al conflicto

paz y se incrementó la presión internacional sobre Rwanda, aunque los procesos de Luanda y de Nairobi iniciados durante 2022 permanecieron estancados. El 3 de junio se celebró en Luanda una cumbre extraordinaria de la CIRGL para discutir sobre RDC y Sudán, en la que participaron el presidente congolés, Félix Tshisekedi, y el primer ministro rwandés, Edouard Ngirente, en lugar del presidente Paul Kagame. El 27 de junio se celebró también en Angola una cumbre cuatripartita de la CIRGL, la SADC, la EAC y la CEEAC bajo los auspicios de la UA en la que los participantes se comprometieron a coordinar mejor todos los esfuerzos e iniciativas de paz en relación al este de RDC. Las presiones internacionales se incrementaron a raíz de la ratificación en junio del apoyo de Rwanda al M23 por parte del Grupo de expertos de la ONU.³⁰ La UE y EEUU impusieron sanciones a altos cargos militares rwandeses y congoleños así como a miembros de grupos armados. Además, EEUU restringió la cooperación militar con Rwanda. El alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, condenó

abiertamente el 7 de julio el apoyo de Rwanda al M23 y la presencia del Ejército rwandés en RDC mientras que el secretario de estado de EEUU, Anthony Blinken, mantuvo conversaciones con el presidente rwandés, Paul Kagame, para intentar reducir la tensión y buscar una solución diplomática.

En septiembre el M23 rompió con el bajo perfil que le había caracterizado en buena parte del año y el 18 de septiembre anunció la toma de control de la localidad de Kiwanja, que nominalmente se encontraba bajo el control de la misión regional de la EAC. En septiembre se extendió el mandato de la misión regional por tres meses hasta diciembre, aunque su papel sobre el terreno siguió siendo testimonial. En octubre se reanudó la ofensiva por parte del M23 después de seis meses de tensa calma en la provincia de Kivu Norte (este). El alto el fuego de facto colapsó y tanto el M23 como la coalición de grupos armados progubernamentales Wazalendo reanudaron sus acciones armadas en diferentes localidades. La reapertura de las hostilidades incrementó la retórica hostil entre Kigali y Kinshasa, por lo que el enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Huang Xia, destacó el riesgo real de un conflicto directo entre Rwanda y RDC, por la movilización de tropas que habían emprendido ambos países, por la ausencia de diálogo directo a un alto nivel entre ellos, y la persistencia del discurso de odio. El presidente Tshisekedi, así como otros candidatos durante la campaña electoral congoleña, utilizaron el

27 Véase el resumen de República Democrática del Congo en el capítulo 2 (Tensiones) en *Alerta 2024. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, Barcelona, 2024.

28 Véase el resumen de República Democrática del Congo en *Negociaciones de paz 2022. Análisis de tendencias y escenarios*; Barcelona: Icaria, 2023.

29 Asmahan Qarjoully, *Violence in DRC intensifies as Qatar takes steps to mediate*, Doha News, 20 de marzo de 2023.

30 Consejo de Seguridad de la ONU, Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 2641 (2022), de 13 de junio de 2023.

conflicto para movilizar a la población del este del país, prometiendo una ofensiva contra Rwanda en caso de victoria electoral.

El 6 de octubre, tras la cumbre cuatripartita celebrada el 27 de junio, los jefes del Estado Mayor de la Defensa de la EAC, la CEEAC, la CIRGL y la SADC se reunieron en Addis Abeba bajo los auspicios de la UA y con la participación de la ONU para coordinar y armonizar las iniciativas de paz en el este de la RDC. Los participantes acordaron garantizar la armonización del calendario de retirada de las misiones existentes sobre el terreno y de los despliegues de fuerzas previstos, mantener un diálogo sobre la vía política de los procesos de Nairobi y Luanda, acelerar los esfuerzos para establecer corredores humanitarios y volver a reunirse antes de fin de año. En este sentido, como consecuencia del descrédito y la inoperancia de la misión de la EAC, incapaz de frenar las acciones del M23, la RDC manifestó que la misión finalizaría su mandato en diciembre tal y como estaba establecido. El 21 de diciembre **completó su retirada del país, en medio de acusaciones hacia las tropas burundesas de colaborar con las Fuerzas Armadas congoleñas**, en lugar de respetar el mandato de la misión. Esta misión, compuesta por tropas de Uganda, Kenya, Burundi y Sudán del Sur, debía recuperar las posiciones que anteriormente ocupaban los rebeldes del M23 tras derrotar a los soldados de las FARDC y establecer una zona de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre el M23 y las FARDC. En paralelo, RDC estuvo manteniendo contactos para que la SADC desplegara una misión militar en el este del país.

En el marco de la campaña electoral congoleña, EEUU estuvo facilitando contactos entre RDC y Rwanda desde mediados de noviembre. **EEUU intentó promover un alto el fuego durante los comicios, que fue utilizado por el M23 para reforzar sus posiciones alrededor de Sake, con apoyo de Rwanda.**³¹

Género, paz y seguridad

Representantes de la sociedad civil local e internacional se dirigieron en diciembre al Consejo de Seguridad de la ONU remarcando la necesidad de que los esfuerzos de negociación política en marcha –los procesos de Luanda y Nairobi– fueran más inclusivos y estuvieran liderados por constructores de paz locales y de la sociedad civil, en especial por mujeres y jóvenes. En este conflicto armado las mujeres y las niñas se han visto gravemente afectadas ya que la violencia sexual y de género ha sido y sigue siendo elevada y, tal y como destacaron, fue en aumento. En la comparecencia se remarcó que los grupos armados siguieron secuestrando o reclutando menores. La violencia armada presente en la región siguió en aumento, en medio de un contexto ya hipermilitarizado donde los permanentes flujos de armas

y la persistencia del estado de sitio solo contribuyeron a exacerbar esta situación. Estas voces de la sociedad civil remarcaron que la propia sociedad civil del país necesita del apoyo internacional, aún más si cabe ante la escalada de la violencia y la anunciada retirada de la MONUSCO del país durante 2024, que podría provocar un potencial vacío de seguridad. El 19 de octubre se celebró una reunión de seguimiento entre un centenar de candidatas, funcionarias y expertas de la sociedad civil y la MONUSCO, tras la celebración en septiembre de un primer debate entre la Representante Especial y 20 candidatas políticas sobre los retos que enfrentaban las mujeres en el contexto electoral. Por otra parte, a pesar de la política de tolerancia cero emprendida por Naciones Unidas, durante el año la MONUSCO registró nuevas denuncias de explotación y abusos sexuales por hechos ocurridos entre 2011 y 2023 que involucraban a miembros del componente militar y civil de la misión.

| Sudán | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: Gobierno de Sudán, Frente Revolucionario de Sudán (SRF, coalición que aglutina a grupos armados de Kordofán Sur, Nilo Azul y Darfur), Movimiento por la Justicia y la Equidad (JEM), Movimientos de Liberación de Sudán, facciones SLA-MM y SLA-AW, Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N) facciones Malik Agar y Abdelaziz al-Hilu Negociaciones de paz crisis nacional: Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y Rapid Support Forces (RSF) |
| Terceras partes | Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP), Troika (EEUU, Reino Unido, Noruega), Alemania, UA, Etiopía, Sudán del Sur, Uganda, IGAD, UNITAMS Negociaciones de paz crisis nacional: Mecanismo trilateral (UNITAMS, UA e IGAD (Etiopía, Sudán del Sur, Djibouti, Kenya, Uganda)); Quad (EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y EAU), Egipto |
| Acuerdos relevantes | Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: Acuerdo de paz de Darfur (DPA) (2006), Acuerdo de Hoja de Ruta (2016), Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación (2019), Acuerdo de Paz de Juba (2020) |
| Síntesis: | En el país se mantienen abiertos diferentes conflictos armados (Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur), así como tensiones entre el Gobierno y la oposición, que han supuesto diferentes frentes de negociaciones de paz y desescalada de la violencia. En Darfur, en medio de las conversaciones de paz para resolver el histórico contencioso entre el norte y el sur del país –que acabó con la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) en el 2005–, diversos grupos armados, principalmente el JEM y el SLA, se rebelaron en 2003 en |

31 Reuters, *Exclusive: Eastern Congo ceasefire extended for two weeks, US official says*, 15 de diciembre de 2023.

torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región. En 2006 se alcanzó un acuerdo de paz, el Darfur Peace Agreement (DPA), que sólo incluyó a una facción del SLA, la liderada por Minni Minawi, mientras persistió el conflicto y los intentos frustrados de diálogo, principalmente promovidos por Qatar en el marco del proceso de paz de Doha, al que se fueron sumando los diferentes actores. Por otro lado, en las conocidas como las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), la secesión de Sudán del Sur en julio de 2011 y la reconfiguración nacional que supuso para Sudán agravaron las tensiones entre esas regiones fronterizas y el Gobierno sudanés, ya que durante el conflicto armado sudanés ambas regiones habían apoyado a la insurgencia sureña del SPLA. La African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP) ha mediado para buscar una resolución pacífica entre las partes (Gobierno y rebelión del SPLM/N) que gira en torno a tres principales ejes en las negociaciones de paz: el modelo de cese al fuego; el tipo de acceso humanitario a las dos áreas; y las características y agenda del Diálogo Nacional. A su vez, a principios de 2014, el entonces presidente sudanés, Omar al-Bashir, hizo un llamamiento al Diálogo Nacional a todos los actores armados y grupos de oposición. La propuesta contó desde sus inicios con la implicación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y de la AUHIP para promover negociaciones de paz y una transformación democrática. Tras la caída del régimen de al-Bashir en abril de 2019, se fusionaron los diferentes procesos y escenarios de negociación de paz en el país entre el nuevo Gobierno de Transición y los diferentes grupos rebeldes de las Dos Áreas y Darfur, logrando, en octubre de 2020, la firma del Acuerdo de Paz de Juba. Sin embargo, varios grupos armados, entre ellos el SPLM-N al-Hilu (Dos Áreas) y el SLM/A-AW (Darfur) se negaron a la firma del acuerdo de paz, manteniéndose las conversaciones de forma separada. En 2022, y debido a la crisis de gobernanza en el país generada por la llegada al poder de la Junta Militar, se abrieron conversaciones entre la Junta y actores políticos y militares para lograr la transición política, que incorporó la revisión del Acuerdo de Paz de Juba. En 2023 las negociaciones se rompieron con el estallido de un nuevo conflicto armado entre las FFAA y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), dando lugar a nuevas iniciativas de mediación.

Las negociaciones impulsadas con la Junta Militar y parte de la oposición política sudanesa encaminadas a lograr la transición política e instaurar un gobierno civil en Sudán se rompieron tras el estallido el 15 de abril de un nuevo conflicto armado en el país entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). A finales de 2022, después de un año de negociaciones auspiciadas por diferentes actores en distintos formatos,³² se había logrado un acuerdo marco para la creación de un gobierno civil de transición con elecciones en dos años. Este acuerdo dio lugar a una segunda fase de negociaciones que se inició el 9 de enero de 2023, centrada en cinco temas que habían quedado pendientes: justicia transicional, reforma del sector de la seguridad, Acuerdo de Paz

de Juba, desmantelamiento del anterior régimen de Omar al-Bashir y la crisis en el este de Sudán. Durante el primer trimestre del año se avanzó con dificultades en las negociaciones pendientes, y fueron aumentando paulatinamente las tensiones entre las partes, sobre todo entre los líderes militares, el presidente del Consejo Soberano y jefe de las Fuerzas Armadas, teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el vicepresidente del Consejo y líder de las RSF, teniente general Mohammed Hamdan Dagalo “Hemedti”.

Uno de los principales motivos del aumento de las tensiones lo representó las diferencias entre las partes militares en la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo alusivo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando. A principios de abril aumentaron los rumores sobre la movilización de efectivos militares de ambas partes en Jartum y Darfur. Estos hechos generaron que distintos actores nacionales e internacionales intensificaran los contactos con las partes militares para lograr una desescalada de la tensión. Entre ellos, diferentes líderes de movimientos armados signatarios del acuerdo de paz, como Gibril Ibrahim, líder del Movimiento por la Justicia e Igualdad (JEM) y actual ministro de Finanzas; Malik Agar, líder del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N)-facción Malik Agar y miembro del Consejo Soberano; y Minni Minawi, Gobernador de la región de Darfur y líder del Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM), formaron un comité nacional de mediación. También el 13 de abril, Alemania, Francia, Noruega, Reino Unido, EEUU y la UE emitieron una declaración conjunta en la que instaron a los líderes militares y civiles sudaneses a adoptar medidas para reducir las tensiones y a colaborar a fin de resolver las cuestiones relacionadas con la reforma del sector de seguridad.³³ Sin embargo, a pesar de las diferentes iniciativas, el 15 de abril estallaron los enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo. Inicialmente las hostilidades se concentraron en la capital, Jartum, pero durante el año se fueron intensificando y extendiendo en casi todo el país.³⁴

El inicio de los combates dio lugar a diferentes esfuerzos e iniciativas de mediación por parte de múltiples actores para poner fin a las hostilidades y retomar las negociaciones de paz, intentos que se mantuvieron durante todo el año sin que se lograra detener la guerra. Entre estas iniciativas, si bien durante el año las partes en conflicto acordaron diferentes altos el

32 Las negociaciones para lograr un gobierno transicional fueron impulsadas, por un lado, mediante una iniciativa de paz intrasudanesa, conocida como mecanismo trilateral, auspiciada por la UNITAMS, la UA y la IGAD; y por otro, mediante conversaciones informales entre la Junta Militar y el Consejo Central de Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC-CC), en lo que se conoció como la mediación del Quad, que incluyó a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y EAU como terceras partes.

33 Informe del secretario general de la ONU, *Situación en el Sudán y actividades de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán*, S/2023/355, 16 de mayo de 2023.

34 Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2024.

fuego (el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio, entre otros), la mayoría tuvieron una duración máxima de 72 horas y en ningún caso se logró el cese de la violencia de forma permanente, sufriendo violaciones continuadas por ambas partes. También se sucedieron diferentes intentos de imponer treguas humanitarias sin muchos resultados.

A pesar de los intentos iniciales de la UA de garantizar un proceso de mediación coordinado, se pusieron en marcha diferentes vías de negociación que, en ocasiones, fueron contrapuestas. Entre las iniciativas más destacadas, EEUU y Arabia Saudita impulsaron “conversaciones previas a la negociación” entre las partes en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita) el 6 de mayo. Estas conversaciones dieron lugar a la firma de la Declaración de Compromiso para Proteger a la Población Civil el 11 de mayo. Sin embargo, a principios de junio los co-facilitadores suspendieron temporalmente las conversaciones a causa de “graves violaciones repetidas” cometidas por ambas partes y EEUU anunció la imposición de sanciones a cuatro empresas afiliadas a las partes beligerantes.

De forma paralela, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) conformó el 16 de abril una iniciativa de alto nivel formada por los presidentes de Kenya, Sudán del Sur y Djibouti –que posteriormente se ampliaría también a Etiopía–, para mediar entre las partes. También la UA y su Consejo de Paz y Seguridad (CPSUA) se posicionaron como actores mediadores. Entre las iniciativas puestas en marcha, el 16 de abril, el CPSUA decidió emprender una misión sobre el terreno para entablar contactos con las partes interesadas. El 27 de mayo aprobó una hoja de ruta para la solución del conflicto integrada por seis elementos: establecimiento de un mecanismo de coordinación para armonizar los esfuerzos de mediación; cese de hostilidades; respuesta humanitaria efectiva; protección de los civiles e infraestructura civil; papel estratégico de los países vecinos y de la región; y reanudación de una transición política creíble e inclusiva.³⁵ Posteriormente, el 12 de junio, la IGAD, en la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, también adoptó una hoja de ruta para la resolución del conflicto, nombrando al Presidente de Kenya, William Ruto, presidente de la iniciativa, hecho que motivó el bloqueo de la iniciativa por parte del Ejército de Sudán, que se opuso a que Kenya asumiera la presidencia.

Por otro lado, a mediados de julio Egipto también anunció su propia iniciativa de mediación, recibiendo el día 13 a líderes de los países vecinos de Sudán. El 29 de agosto, al-Burhan, quien días antes logró romper el asedio de las RSF sobre el cuartel general en donde estaba instalado desde hacía meses, viajó a Egipto para mantener conversaciones con su homólogo. Días antes, el 27 de agosto, las RSF expresaron su voluntad de entablar conversaciones de paz, presentando un plan de diez puntos para una “paz duradera” que al-Burhan rechazó.

El inicio de los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) rompió las negociaciones sobre la transición política y la instauración de un gobierno civil en Sudán

A finales de octubre se desarrolló la segunda ronda de conversaciones de paz en la ciudad saudí de Jeddah, del 26 de octubre al 7 de noviembre, donde la IGAD y la UA actuaron, junto con EEUU y Arabia Saudita, como co-facilitadores, sin lograr avances. A finales de año se anunció una reunión cara a cara en Djibouti entre los líderes de las SAF y RSF, pero esta fue pospuesta por “razones técnicas”. Dicho encuentro habría representado la primera vez que al-Burhan y Dagalo se reunían desde el inicio de la guerra. Finalmente, a finales de año, Dagalo realizó una gira por la región para recabar apoyos, siendo recibido por los líderes de Uganda, Etiopía, Kenya, Djibouti o Sudáfrica, lo que fue calificado por parte de al-Burhan como “actos de hostilidad”. Asimismo, el 2 de enero de 2024, las RSF se reunieron en Addis Abeba con la coalición civil sudanesa liderada por el ex primer ministro, Abdalla Hamdok, Coordinación de las Fuerzas Civiles Democráticas, conocida como Taqaddum, y firmaron la llamada Declaración de Addis Abeba, que incluyó compromisos para el retorno de las millones de personas desplazadas a sus hogares, crear corredores seguros e incluir a civiles en las conversaciones de paz. En la firma del acuerdo, que pretende servir como base para futuras negociaciones y lograr un acuerdo político, el grupo paramilitar anunció que estaba abierto a un alto el fuego inmediato e incondicional y a entablar conversaciones con las SAF.³⁶

A medida que los esfuerzos de mediación fueron fracasaron, el conflicto entre las SAF y las RSF se fue intensificando y los combates involucraron a otros grupos armados en regiones como Kordofán Sur, Nilo Azul o Darfur, región que fue testigo de la peor violencia desde la guerra civil. Si bien al inicio del estallido de la violencia, varios grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba, entre ellos los dirigidos por Minni Minawi, Gibril Ibrahim y Malik Agar, declararon

35 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, *Situación en el Sudán y actividades de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán*, S/2023/644, 31 de agosto de 2023.

36 Reuters, “Sudan’s RSF open to talks on immediate ceasefire with army”, 3 de enero de 2024.

su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso de los meses fueron tomando partida en las hostilidades. En noviembre, y tras el avance de las RSF en la región de Darfur, los signatarios darfuríes del Acuerdo de Paz de Juba renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF, ampliando el conflicto.

Género, paz y seguridad

Desde el inicio de los enfrentamientos armados entre las SAF y las RSF surgieron diferentes iniciativas dirigidas por mujeres que pedían un alto el fuego, ponían de relieve las necesidades humanitarias y condenaban la violencia sexual relacionada con el conflicto. Asimismo, exigieron la participación de las mujeres en las negociaciones de los alto el fuego y de todo proceso político futuro y denunciaron la falta de inclusividad de las mujeres en estos espacios. Entre las iniciativas más destacadas, el 13 de julio 75 organizaciones de la sociedad civil, incluidas fuerzas políticas, grupos de defensa de los derechos de las mujeres, redes de jóvenes, comités de resistencia, sociedad civil y actores del mundo académico, emitieron una Declaración de Principios de los Agentes Civiles para Poner Fin a la Guerra y Restablecer la Democracia en el país. También a finales de octubre, ONU Mujeres, en asociación con la IGAD, la UA y el Centro Internacional de Mujeres por la Paz, organizaron una conferencia con mujeres sudanesas constructoras de paz en Kampala (Uganda) que contó con la participación de más de 400 mujeres de 14 estados sudaneses. La conferencia tuvo como objetivo construir puentes entre las mujeres en Sudán y en los países de la región y destacó el papel de liderazgo que están desempeñando las mujeres y las jóvenes sudanesas en el movimiento por la paz.³⁷

Por otro lado, la Dependencia sobre la Violencia contra las Mujeres integrada en el Ministerio de Asuntos Sociales de Sudán, denunció un aumento de los actos de violencia de género presuntamente perpetrados por las RSF y combatientes afines en Jartum, Darfur Meridional y Darfur Occidental. También organizaciones de derechos humanos estimaron que, a raíz del conflicto, el número de personas que necesitaron en 2023 servicios de prevención de la violencia de género y respuesta a ella aumentó en más de un millón, situándose la cifra en 4,2 millones de personas en todo el país. Asimismo, denunciaron que el crecimiento de la inseguridad en todo el país y los ataques contra hospitales redujeron drásticamente la capacidad de prestar servicios a las supervivientes.

Sudán del Sur

Actores negociadores Acuerdo de Paz Revitalizado (2018): Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), otros grupos armados (SSOA, SPLM-FD, entre otros); Facciones del SPLM-IO (facción Kitgwang liderada por Simon Gatwech Dual y facción dirigida por el general Johnson Olony)
Negociaciones de Roma: Gobierno, Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) –antes SSOMA: National Salvation Front (NAS), South Sudan United Front (SSUF), the Real SPLM, South Sudan People's Patriotic Movement (SSPPM).

Terceras partes Acuerdo de Paz Revitalizado (2018): "IGAD Plus" (Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda), UA (Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches; UNMISS
Negociaciones de Roma: Comunidad de Sant Egidio

Acuerdos relevantes Acuerdo de paz (2015), Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario (2017), Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018)

Síntesis:

Después de años de conflicto armado que enfrentó al Gobierno central de Sudán y el sur del país, liderado por la guerrilla del SPLM/A, Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en 2011, tras la realización del referéndum previsto en el acuerdo de paz de 2005 (Comprehensive Peace Agreement, CPA) facilitado con la mediación de la IGAD. La firma de la paz entre Sudán y Sudán del Sur y la consecución de la independencia no logró, sin embargo, acabar con la conflictividad y la violencia. Sudán del Sur siguió envuelto en una serie de conflictos internos por el control de territorio, ganado y poder político, así como por las prácticas neo-patrimoniales y la corrupción en el seno del Gobierno, que no han permitido lograr la estabilidad y consolidar la paz. Como parte de las negociaciones de paz impulsadas en abril de 2013, el presidente ofreció una amnistía a seis comandantes de grupos rebeldes. Sin embargo, en diciembre de 2013, las tensiones entre las facciones leales al presidente Salva Kiir y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, líder del SPLA-in-Opposition (SPLA-IO), dieron paso a una nueva escalada de violencia en diversas regiones del país. En enero de 2014, y a través de la mediación de la IGAD, el Gobierno y el SPLA-IO iniciaron conversaciones de paz en Addis Abeba (Etiopía). Los esfuerzos diplomáticos se encontraron con muchos obstáculos para lograr acuerdos de alto el fuego efectivos, habiendo firmado nueve compromisos diferentes entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, de

37 UN Women Africa, "Sudanese women advocate for peace at conference in Uganda", 22 de diciembre de 2023

cese de hostilidades y medidas transitorias que fueron sistemáticamente violados, lo cual impidió sentar las bases de una solución política al conflicto. El 17 de agosto de 2015, y tras fuertes presiones internacionales y amenazas de bloqueos y sanciones económicas, las partes firmaron un acuerdo de paz promovido por la IGAD Plus, aunque persistieron los enfrentamientos y el incumplimiento del acuerdo. Posteriormente se han logrado nuevos acuerdos entre las partes, entre los cuales destaca el Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018). Desde entonces el Gobierno mantiene conversaciones de paz en Roma con los grupos no signatarios del R-ARCSS.

Durante el año se produjeron algunos avances en la implementación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS) y se confirmó la celebración de elecciones presidenciales para diciembre de 2024. El 22 de febrero marcó el final del plazo original del período de transición de tres años establecido en el R-ARCSS y el inicio del período de transición ampliado de 24 meses, que finalizará, según lo acordado por las partes en virtud de la hoja de ruta, el 22 de febrero de 2025. También al inicio de año, el Gobierno de Transición informó de nuevos avances vinculados con la implementación del R-ARCSS, entre ellos, la firma el 1 de enero por parte del presidente Salva Kiir de diez importantes leyes –incluida la Ley de Elaboración de la Constitución y la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, no fue hasta el 6 de junio cuando el Comité Permanente de Alto Nivel para la aplicación de la hoja de ruta, compuesto por las partes signatarias del R-ARCSS, celebró la reunión consultiva inaugural en donde se constituyó el Comité Nacional Reconstituido de Revisión de la Constitución, luego de seis meses de retraso desde su anuncio. Por otro lado, el 4 de julio, el presidente Kiir confirmó que se celebrarían elecciones presidenciales en diciembre de 2024 y anunció que se presentaría como candidato a la presidencia. El anuncio generó importantes dudas de actores nacionales e internacionales sobre la capacidad del país para celebrar unas elecciones libres, justas y creíbles debido a las demoras en la implementación de algunas cláusulas del Acuerdo de Paz. Nicholas Haysom, jefe de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), subrayó que para que se dieran las condiciones para poder celebrar las elecciones con garantías, el país debía previamente avanzar en el nuevo marco constitucional, detallar el registro de votantes –incluyendo un mecanismo para garantizar la participación de las personas refugiadas–, elaborar un plan de seguridad electoral, avanzar en la constitución de las Fuerzas Armadas Unificadas y generar un mecanismo para la resolución de disputas sobre los resultados.³⁸

***Sudán del Sur
ratificó el Protocolo
de la UA de la Carta
Africana de Derechos
Humanos y de los
Pueblos sobre los
derechos de las
mujeres en África
(Protocolo de Maputo)***

Posteriormente, el 18 de septiembre la Asamblea Legislativa Nacional de Transición Revitalizada aprobó la Ley Electoral Nacional, generando controversias por algunas cláusulas unilaterales aplicadas por Kiir y la condena de la oposición, así como el boicot a la votación por parte del SPLA-IO que encabeza el vicepresidente Riek Machar. El 3 de noviembre se reconstituyeron la Comisión Electoral Nacional, la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución y el Consejo de los Partidos Políticos, siendo esta última institución la única que respetó la cuota del 35% de mujeres en su composición acordada en el R-ARCSS.

El segundo y tercer trimestre del año estuvo marcado por nuevas tensiones entre los principales partidos signatarios del R-ARCSS, el SPLM encabezado por presidente Kiir y el SPLA-IO liderado por el vicepresidente Machar, que amenazaron la unidad del gobierno transicional. La crisis se produjo a principios de marzo cuando Kiir destituyó a la ministra de Defensa y Asuntos de los Veteranos, Angelina Teny, nombrada por el SPLA-IO y al ministro del Interior, Mahmoud Solomon, quitándole la cartera al SPLA-IO, al que le dio el Ministerio de Interior. Este hecho fue denunciado por el SPLA-IO debido a que representaba una violación del acuerdo de paz y generó importantes tensiones políticas entre las partes durante el año. La Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida también determinó que la destitución y el intercambio de carteras constituían una violación del R-ARCSS. Finalmente, el 27 de septiembre, Kiir nombró a Angelina Teny ministra del Interior, poniendo fin a la crisis.

Por otro lado, el SPLA-IO siguió padeciendo importantes escisiones internas que debilitaron a la formación. El 7 de junio, el presidente Kiir y Johnson Olony, líder de la milicia Shilluk Agwalek –una escisión del SPLA-IO y de la facción Kitgwang³⁹– acordaron integrar oficialmente a los combatientes agwalek en las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en el mes de octubre se registraron otras dos importantes deserciones del SPLA-IO que pasaron a apoyar a la facción del gobierno liderada por Kiir, la de Simon Maguek Gai, comandante del estado de Unidad, y la de Michael Wal Nyak, comandante del estado de Jonglei, lo que redujo drásticamente la capacidad militar del SPLA-IO en ambos estados. Las tensiones entre las fuerzas de Machar y las de Gai provocaron durante el resto del año combates en el estado de Unidad, que generaron que el SPLA-IO perdiera todas sus posiciones militares salvo el condado de Panyijjar, su último bastión en Unidad.

En lo relativo a **las conversaciones de paz de Roma** bajo los auspicios de la Comunidad de Sant'Egidio que

38 UN News, "South Sudan: No basis for free and fair 2024 elections, warns Haysom", 14 de diciembre de 2023.

39 El 9 de agosto de 2022, el general Gatwech Dual, líder de la facción Kitgwang escindida del SPLA-IO, destituyó al general Johnson Olony como su adjunto, motivando la conformación de una nueva facción Kitgwang.

desde 2019 mantiene el Ejecutivo sursudanés con los grupos no signatarios del R-ARCSS –representados bajo la coalición Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) –, el presidente Kiir levantó formalmente la suspensión de las conversaciones de paz el 3 de febrero coincidiendo con la visita al país del papa Francisco. Las mismas, que llevaban suspendidas desde finales de noviembre de 2022, si bien se reanudaron entre el 21 y 23 de marzo, no lograron ningún acuerdo sobre su agenda, volviéndose a cancelar y no registraron avances significativos durante el resto del año.

Género, paz y seguridad

En el mes de marzo, Sudán del Sur finalizó la ratificación del Protocolo de la UA de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África (conocido como el Protocolo de Maputo).⁴⁰ La ratificación, que se produce una década después de su firma por el Gobierno sursudanés en enero de 2013, obliga a un compromiso con la igualdad de género, e insta a las autoridades del país a adoptar políticas y estrategias efectivas para garantizar que el protocolo marque una diferencia en la vida de las personas. Por otro lado, también en marzo, Sudán del Sur, bajo el liderazgo del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar, aprobó el segundo plan de acción nacional sobre la agenda de mujeres, paz y seguridad (2023-2027). Si bien el primer plan (2015-2020) se aprobó en el año 2015, el resurgimiento del conflicto un año después ralentizó su implementación. El nuevo plan de acción solicita al Gobierno que financie su implementación, en lugar de depender de los donantes, y también prevé su desarrollo a nivel estatal y local, de modo que las actividades se centren más en las realidades de las comunidades locales. A mediados de diciembre, miembros del Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU visitaron el país y se reunieron con funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y asociaciones de mujeres, de la UNMISS, ONU Mujeres y otras entidades de la ONU en Sudán del Sur. El propósito de la misión era conocer la situación de las mujeres y las niñas en el contexto político actual, así como la implementación de las disposiciones del acuerdo de paz (R-ARCSS) relacionadas con el género.⁴¹ Si bien el acuerdo incluye una cuota del 35% para mujeres en todas las instituciones y procesos ejecutivos y de transición, esta medida no se ha cumplido en la mayoría de las comisiones creadas para implementar el acuerdo de paz, ni en el Gobierno y el Parlamento actuales. En los órganos creados durante el 2023, la cuota acordada de representación de las mujeres solo era respetada en el Consejo de Partidos Políticos (40%), pero no en la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución (32%) ni en el Comité Electoral

Nacional (22%). Tampoco se cumplía en la elección de gobernadores de los estados, donde sólo uno de los diez gobernadores de Sudán del Sur es mujer.

| Sudán – Sudán del Sur | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur; Comunidades étnicas de la región de Abyei |
| Terceras partes | IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), UNISFA, ONU |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de paz global (CPA) (2005); Acuerdo de cooperación (2012); Acuerdo de delimitación de la frontera compartida (2019) |

Síntesis:

El conflicto bélico entre Sudán y su parte meridional, actualmente Sudán del Sur, que duró más de 30 años se caracterizó por una acentuada complejidad cuya naturaleza abordó distintas dimensiones relativas a la cultura y a la historia de ambos países, marcada por dos guerras civiles (1963-1972 y 1983-2005). El Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés) de enero del 2005 estableció la celebración de un referéndum en el sur del país sobre la independencia de esta región. La consulta se celebró en enero de 2011 y, después de una clara victoria de los partidarios del sí, en julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia convirtiéndose en un nuevo Estado. Sin embargo, la separación de ambos países no puso fin a las desavenencias entre Jartum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

El estallido del conflicto armado en Sudán dificultó que se produjeran avances en las negociaciones entre Sudán y Sudán Sur, sobre todo vinculadas a la resolución del contencioso por la región de Abyei, aunque sí se lograron avances en la resolución de disputas intercomunitarias.

Según los informes de 2023 del secretario general de la ONU sobre la situación en Abyei –el primero cubría el periodo del 4 de octubre de 2022 al 18 de abril de 2023 y el segundo del 19 de abril al 3 de octubre de 2023–, si bien el primer período se caracterizó por los contactos de alto nivel entre Sudán y Sudán del Sur destinados a mejorar la cooperación en lo que respecta a Abyei y a las cuestiones fronterizas y a allanar el camino para las deliberaciones sobre su estatuto definitivo, el segundo destacó por el estancamiento del proceso político de Abyei debido al estallido de los enfrentamientos armados el 11 de abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) en Sudán, que se mantuvieron durante todo el año.⁴²

40 Nyagoah Tut Pur, “South Sudan Ratifies Crucial African Women’s Rights Treaty”, Human Rights Watch, 8 de junio de 2023.

41 UN Women Africa, “Members of the Security Council’s Informal Expert Group on Women, Peace and Security visit South Sudan”, 15 de diciembre de 2023.

42 Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Conflictos Armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2024! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2024.

Estos enfrentamientos se precipitaron apenas cinco días después de la segunda ronda de conversaciones del Comité de Alto Nivel de Sudán y Sudán del Sur sobre Abyei, celebrada los días 9 y 10 de abril en Jartum. La reunión estuvo presidida por el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán y jefe de las RSF y por el asesor presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional de Sudán del Sur, y contó con la presencia de Hanna Serwaa Tetteh, enviada especial del secretario general de la ONU para el Cuerno de África, la Misión de la ONU en Abyei (UNISFA), la UA y IGAD. En ella las partes reiteraron su compromiso con una colaboración constructiva y acordaron que la cuestión del estatuto definitivo de Abyei se examinaría en las rondas de conversaciones venideras, las cuales quedaron interrumpidas por la violencia. Anteriormente, el 12 de enero de 2023, el presidente de Sudán del Sur y el presidente del Consejo Soberano de Sudán, durante una reunión bilateral celebrada en Juba, habían examinado la situación en Abyei y algunas medidas que se podrían adoptar para mejorar la cooperación fronteriza, entre ellas la formación de una fuerza de seguridad conjunta a lo largo de la frontera entre ambos países. Sin embargo, lejos de avanzar, durante el año se denunció la violación del Acuerdo de 2011 sobre las Disposiciones Transitorias para la Administración y la Seguridad de la Zona de Abyei, entre las que se encuentra la condición desmilitarizada y libre de armas de Abyei. Ambas partes posicionaron tropas y efectivos de seguridad en la parte meridional y septentrional de Abyei.

Cabe destacar que **se observaron algunos avances en la resolución de disputas y tensiones de ámbito intracomunitario transfronterizo** entre comunidades dinka ngok y dinka twic, y entre miseriya y dinka ngok, todo lo cual hizo que los enfrentamientos disminuyeran considerablemente. Tras meses de tensiones entre miembros de las comunidades dinka ngok y dinka twic que afectan a la parte meridional de la zona de Abyei y a la parte septentrional del estado de Warrap (Sudán del Sur), y que habían comenzado en febrero de 2022 por una controversia sobre tierras, durante el año se desarrollaron varias iniciativas de paz. El 20 de marzo el presidente de Sudán del Sur convocó a los gobernadores de los estados de Warrap y Lagos, al administrador principal de Abyei nombrado por Juba y a los dirigentes tradicionales de las comunidades dinka ngok y dinka twic para examinar sus controversias. Estos últimos se comprometieron a poner fin a las hostilidades y acordaron el despliegue de fuerzas de seguridad en las zonas en disputa con el fin de crear una zona de amortiguación. Posteriormente, debido a la persistencia de las tensiones, entre el 3 y el 6 de abril se desarrolló una conferencia de paz en Wau (Sudán del Sur), en donde las partes volvieron acordar el cese de hostilidades. Finalmente, entre el 7 y el 9 de agosto se volvieron a desarrollar conversaciones de reconciliación entre ambas comunidades en Wau, donde se acordó, entre otros puntos, un alto el fuego y la libertad de circulación entre las zonas afectadas por las tensiones.

En paralelo, con relación a las tensiones y enfrentamientos entre miembros de comunidades dinka ngok y miseriya, entre el 20 y 23 de marzo se desarrolló en Todach (zona de Abyei) una conferencia de paz entre las partes que dio como resultado la firma de un acuerdo que incluyó el cese de hostilidades, la libertad de circulación, la necesidad de reactivar el comité conjunto comunitario de paz y la continuación del diálogo de paz. Posteriormente, entre el 7 y 9 de junio, la UNISFA, Concordis International y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) organizaron conjuntamente una conferencia de corredores de trashumancia entre las comunidades miseriya y dinka ngok, en donde los representantes de ambas comunidades acordaron medidas concretas para garantizar la trashumancia pacífica.

Género, paz y seguridad

En relación con avances en materia del despliegue de la agenda mujeres, paz y seguridad, la UNISFA informó que durante el año se impulsó que autoridades tradicionales y locales, redes de mujeres y la sociedad civil se implicaran en cuestiones relacionadas con las mujeres y la paz y la seguridad en la región, dando prioridad al fomento de la participación de las mujeres en las estructuras de gestión de conflictos y a la defensa de la inclusión de las mujeres en la administración local. En este último aspecto, en el nuevo gabinete de la administración de Abyei nombrada por Sudán del Sur, se asignaron dos de los ocho puestos ministeriales a mujeres. UNISFA también celebró nueve reuniones con 117 mujeres de diversos sectores entre abril y agosto y facilitando tres reuniones mensuales del comité conjunto de mujeres por la paz. Finalmente, en relación con la resolución de disputas intercomunitarias, 87 mujeres fueron incorporadas durante el año a los comités de protección comunitaria establecidos en el norte de Abyei, representando el 25% de sus miembros.

| Libia | |
|-----------------------------|---|
| Actores negociadores | Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), Consejo Presidencial, Alto Consejo de Estado, Cámara de Representantes (CdR), LNA o ALAF |
| Terceras partes | ONU; Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Holanda, Suiza, Türkiye, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez (Proceso de Berlín) |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat (2015), Acuerdo de cese el fuego permanente (2020) |

Síntesis:

Después de la caída del régimen de Muamar Gaddafi en 2011, Libia ha vivido un proceso de transición con múltiples desafíos políticos, económicos, sociales, institucionales y de seguridad, en un contexto caracterizado por la presencia de

numerosos actores armados y la intervención y proyección de intereses de múltiples actores foráneos. Desde 2014, el país norteafricano ha sido escenario de una creciente violencia y convulsión política, que derivó en la conformación de dos grandes polos de poder. Ante esta evolución se han activado iniciativas de mediación lideradas por la ONU que han intentado buscar una salida a la crisis en un proceso no exento de obstáculos debido a las disputas de legitimidad, la diversidad de actores implicados, los múltiples intereses en juego y el persistente clima de violencia en el país, entre otros factores. A finales de 2015, bajo los auspicios de la ONU, se firmó el Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat, en medio de un clima de persistentes divisiones y escepticismo por las previsibles dificultades para su implementación. En octubre de 2017, Naciones Unidas presentó un nuevo plan para reactivar la transición política y facilitar la implementación del Acuerdo Político de Libia. En el marco del denominado Proceso de Berlín –iniciado en 2019 y en el que participan una docena de países, además de la ONU, Liga Árabe, la UE y la UA–, en 2020 se pusieron en marcha negociaciones intra-libias en torno a tres componentes: de seguridad (a cargo de la Comisión Militar Conjunta 5+5), político (en manos del Libyan Political Dialogue Forum o LPDF) y económico; y se activó un Comité Internacional de Seguimiento. A finales de 2020, se oficializó un acuerdo de cese el fuego permanente y se anunció una hoja de ruta que derivó en la conformación de un gobierno de unidad y que preveía la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre de 2021. Los comicios no se celebraron, en un contexto de divisiones y luchas de poder que motivó la conformación, nuevamente, de dos gobiernos paralelos, abriendo una nueva etapa de incertidumbre en el país.

Durante 2023 continuaron las negociaciones que involucran a distintos actores locales e internacionales, pero no se consiguió un acuerdo político definitivo para la celebración de elecciones en el país, que inicialmente estaban previstas para diciembre de 2021. Persistió por tanto el impasse que a principios de 2022 había derivado en la configuración de dos gobiernos rivales, uno con sede en Trípoli –el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido por la ONU y encabezado por el primer ministro Abdul Hamid Mohammed Dbeibah– y otro establecido en la zona este del territorio –el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), liderado por el primer ministro Fathi Bashagha (hasta marzo) y luego por Osama Hamad; y alineado con la Cámara de Representantes (Tobruk) y el grupo armado LNA (o ALAF) del general Khalifa Haftar. El prolongado bloqueo político siguió contribuyendo a la inestabilidad económica y de seguridad en Libia, aunque en términos generales durante el año se mantuvo vigente el acuerdo de cese el fuego de octubre de 2020 y los niveles de violencia de baja intensidad. La fragilidad de la situación en el país norteafricano también quedó expuesta en 2023 por las desastrosas consecuencias de la tormenta Daniel que en septiembre derivó en la destrucción de dos presas y en la muerte y desaparición de miles de personas en Derna (este).

A principios de año el representante especial de la ONU en Libia y jefe de la misión en el país (UNSMIL), Abdoulaye Bathily, centró sus esfuerzos en apoyar el diseño de una nueva hoja de ruta para que los comicios

puieran celebrarse a finales de 2023. En febrero, anunció su intención de establecer un panel de alto nivel para las elecciones, conformado por políticos, líderes tribales, actores del ámbito de seguridad y representantes de la sociedad civil, jóvenes y mujeres, entre otros. Este panel estaría a cargo de facilitar la adopción del marco legal y el cronograma para la votación. En paralelo, los cuerpos legislativos de los dos gobiernos rivales estaban involucrados en un diálogo –impulsado en 2022 por la ONU– para intentar delinear el marco constitucional para los comicios. Así, se aprobaron reformas a la Declaración Constitucional de 2011 para definir el rol del presidente, primer ministro y el Parlamento –objeto de algunas críticas por parte de Bathily y otros observadores por no resolver algunos temas controvertidos– y se anunció una hoja de ruta propia para las elecciones. A principios de marzo, los dos órganos legislativos –la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado (establecido como un cuerpo asesor, pero que desempeña funciones de legislativo del GUN) anunciaron la conformación de un Comité Conjunto 6+6 para redactar las leyes electorales. Bathily reconoció que este organismo tenía la responsabilidad principal de definir las normas para los comicios y que el panel que había propuesto podía desempeñar un papel auxiliar.

En junio, tras varias jornadas de reuniones en Marruecos, el Comité 6+6 –integrado por seis representantes de cada legislativo– anunció que había alcanzado un acuerdo sobre las leyes electorales. No obstante, varias facciones políticas presentaron objeciones y demandaron una revisión del texto. La Comisión 6+6 presentó una versión revisada, que fue aprobada en octubre por la Cámara de Representantes, pero no así por el Alto Consejo de Estado, que aprobó la versión anterior y rechazó los cambios que permitían la presentación de candidaturas de cargos militares. La UNSMIL realizó una “revisión técnica” de las leyes electorales e identificó una serie de disposiciones que fueron enmendadas, pero varios asuntos controvertidos de carácter más político continuaron sin resolver. Hasta finalizar el año persistía el disenso en torno a la obligatoriedad de una segunda ronda en las elecciones presidenciales a pesar de que uno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos; la celebración de elecciones parlamentarias condicionada al éxito de los comicios presidenciales; las garantías de un proceso más inclusivo con otros actores libios (incluyendo mujeres) y la conformación de un gobierno de unidad interino encargado de organizar las elecciones. Este último punto seguía siendo el más polémico. La ONU se había mostrado inicialmente reacia a la idea de un nuevo gobierno de unidad por considerar que podía desalentar a las partes del cumplimiento de sus compromisos en materia electoral y reforzar el estatus quo. Sectores libios y gobiernos occidentales también se mostraban partidarios de celebrar la votación primero y conformar un nuevo gobierno después. No obstante, en agosto –en lo que análisis destacan como un cambio de posición–, Bathily defendió ante el Consejo de Seguridad de la

ONU el planteamiento del Comité 6+6 y argumentó que un gobierno unificado, acordado por los principales actores, era indispensable para celebrar elecciones en el país. EEUU, que también había manifestado escepticismo ante la configuración de un nuevo gobierno en Libia, también se mostró dispuesto a apoyar un Ejecutivo tecnocrático con la única tarea de organizar los comicios. Algunos análisis subrayaron entonces que, aunque no se trataba de la opción ideal, era el camino más realista para apostar por la reunificación del país y destacaron que la ONU tampoco estaba en posición de imponer una salida diferente.

Para intentar desbloquear el diálogo, en noviembre Bathily invitó formalmente a representantes de cinco instituciones –el Consejo Presidencial, la Cámara de Representantes, el Alto Consejo de Estado, el Gobierno de Unidad Nacional y el LNA– para intentar llegar a un consenso en torno al proceso político. La iniciativa contó con el respaldo de diversos actores internacionales, entre ellos los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que emitieron un comunicado conjunto apelando a las partes a aprovechar la oportunidad para construir una estabilidad de largo plazo para Libia. El enviado especial de la ONU pidió que cada uno de estos actores libios designara a tres representantes para participar en una reunión preparatoria en la que se definirían los términos y agenda del encuentro. Los distintos actores no rechazaron la invitación, pero plantearon algunas condiciones. Entre ellas, Khalifa Haftar exigió la inclusión del gobierno designado en el este del país o, como alternativa, la exclusión de ambos gobiernos. La Cámara de Representantes también había lamentado que no se invitara a este espacio al Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) –no reconocido oficialmente por la ONU, ni por ningún gobierno–, y rechazó la participación del Gobierno de Unidad Nacional (GUN). En tanto, Dbeibah, el primer ministro del GUN, aceptó discutir los temas relacionados con las leyes electorales, pero rechazó cualquier discusión en torno a un nuevo gobierno. Ante este escenario, al finalizar el año el representante especial de la ONU advertía sobre la necesidad de un compromiso político de los principales actores para evitar una nueva deriva de violencia en el país. Bathily también subrayó que en sus reuniones con otros múltiples actores de la sociedad libia para intentar asegurar un proceso más inclusivo había constatado el clamor por unas elecciones en el más breve plazo posible y la fatiga y decepción extrema ante las tácticas dilatorias de algunos actores políticos. Consciente de la relevancia de contar con apoyo regional e internacional para favorecer el proceso político en Libia, a lo largo de 2023 el representante especial de la ONU realizó viajes y mantuvo contactos con diversos actores, entre ellos Argelia, Marruecos, Túnez, Qatar, Türkiye, EAU, China, Rusia y la UE.

Cabe destacar que **durante el año continuó el trabajo en materia de seguridad de la Comisión Militar Conjunta**

5+5, que mantuvo reuniones en Libia, Egipto y Túnez. Este mecanismo –reconocido en declaraciones de Bathily como un “aliado clave para la UNSMIL comprometido con la unidad libia”– examinó la implementación del acuerdo de cese el fuego y de otras disposiciones de ese pacto, como la retirada de fuerzas extranjeras y mercenarios del país, aunque la puesta en práctica de este último aspecto se vio comprometida por el impasse político y por el deterioro de la situación en el Sahel y en Sudán. Pese a ello, en 2023 se informó de algunas iniciativas en el ámbito de seguridad, como el trabajo conjunto de supervisores del cese el fuego libios e internacionales en Sirte; las reuniones convocadas para abordar los retos de seguridad de las futuras elecciones; las conversaciones preliminares sobre temas de desarme, desmovilización y reintegración; o el establecimiento de mecanismos de coordinación entre Libia, Sudán y Níger para facilitar la retirada total de combatientes foráneos y mercenarios. Este último mecanismo fue lanzado oficialmente en marzo, en paralelo a una reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad del Comité de Seguimiento Internacional sobre Libia del Proceso de Berlín. Cabe recordar que este comité continuó siendo el principal marco para la implicación de actores internacionales en el proceso libio, con diferentes grupos de trabajo: el de seguridad, co-liderado por Francia, Italia, Türkiye, Reino Unido y la UA; el político, co-liderado por la ONU, Argelia, Alemania y la Liga Árabe; el de DIH y derechos humanos, co-liderado por Holanda, Suiza y la ONU; el económico, co-liderado por Egipto, EEUU, la UE y la ONU.

En el plano de las negociaciones económicas, en agosto se anunció un acuerdo para la reunificación del Banco Central y la activación de comités técnicos para implementar el proceso. También hubo llamamientos a los gobiernos rivales a comprometerse con una respuesta unificada y transparente tras la tragedia provocada por la tormenta Daniel, ante el despliegue de iniciativas paralelas y pugnas por el control de los fondos de reconstrucción. Durante 2023 también se informó de iniciativas para propiciar un proceso de reconciliación en el país, promovido por el Consejo Presidencial libio con el apoyo de la Unión Africana –en julio se celebró una reunión del comité preparatorio en Brazzaville (Congo).

Género, paz y seguridad

Durante el año uno de los temas principales fue la participación de las mujeres en el proceso político y electoral. En las consultas con el representante especial de la ONU diversos sectores libios, incluyendo mujeres, expresaron su aspiración a un proceso más inclusivo y sus sentimientos de frustración ante el bloqueo persistente. En este contexto, el panel de alto nivel para las elecciones organizó en mayo una conferencia regional en Trípoli sobre el fortalecimiento

de la participación de las mujeres en elecciones, a la que asistieron representantes de 12 países árabes. En este espacio se enfatizó la necesidad de garantizar la inclusión de mujeres en todas las fases de los comicios. También se dieron a conocer resultados preliminares de una plataforma –eMonitorplus– con la que se realiza seguimiento de violencia contra las mujeres en contextos electorales. **Grupos de mujeres de las distintas regiones de Libia mantuvieron contactos con actores políticos y miembros del comité 6+6 para trasladar su aspiración de que las normas electorales garantizaran una representación significativa de las mujeres en la futura Asamblea Nacional.** Pese a estas iniciativas, las leyes electorales aprobadas en el segundo semestre establecieron una cuota de solo seis escaños para mujeres en el Senado, de un total de 90 (6,6%), un porcentaje muy distante del 20% definido en la reforma constitucional.

Paralelamente, en 2023 la UNSMIL y distintas agencias de la ONU continuaron apoyando iniciativas de formación y capacitación, entre ellas sobre temas electorales con perspectiva de género –50 mujeres de todas las regiones de Libia, en septiembre–; liderazgo, toma de decisión y habilidades comunicativas – programa de un año en el que participan 30 mujeres jóvenes libias–; gobernanza; respuestas ante la violencia sexual; entre otros. Por otra parte, también se denunció la adopción de normas restrictivas y discriminatorias para las mujeres, como la que en abril aprobó procedimientos contra las mujeres que viajan sin acompañantes masculinos en el oeste del país.

| Marruecos – Sáhara Occidental | |
|-------------------------------|--|
| Actores negociadores | Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO) |
| Terceras partes | ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia) |
| Acuerdos relevantes | Acuerdo de cese el fuego (1991) |

Síntesis:

Los intentos de mediación y búsqueda de una salida negociada al conflicto del Sáhara Occidental derivaron en un acuerdo de cese el fuego en 1991. Desde entonces, y pese a la existencia de un marco formal de negociaciones bajo los auspicios de la ONU, el proceso de paz sobre el Sáhara Occidental no ha fructificado. Las sucesivas propuestas y numerosas rondas de negociaciones no han suscitado un acuerdo entre las partes, que mantienen sus respectivas líneas rojas: Marruecos insiste en su reclamo sobre el territorio y sólo está dispuesto a admitir un estatus de autonomía, mientras que el Frente POLISARIO reivindica la necesidad de llevar a cabo un referéndum que incluya la opción de independencia. Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental –reconocido como un territorio pendiente de descolonizar– se han visto determinadas por la asimetría de los actores en disputa, la incapacidad de la ONU para poner en marcha una consulta sobre el futuro del territorio, la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia –apoyo clave

para el POLISARIO–, y por el respaldo a Rabat por parte de actores internacionales clave, como EEUU o Francia, lo que ha determinado, en la práctica, una prevalencia de las tesis marroquíes en la aproximación al conflicto. A finales de 2020, tras incidentes con Marruecos en la zona de Guerguerat, el Frente POLISARIO dio por finalizado el acuerdo de cese el fuego.

A lo largo de 2023, **la búsqueda de una salida política para la cuestión del Sáhara Occidental continuó girando principalmente en torno a la actividad diplomática del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, aunque sus gestiones no consiguieron reactivar las negociaciones durante el año.** Los intentos de De Mistura por favorecer la reanudación del diálogo se produjeron en un contexto en el que persistieron las hostilidades de baja intensidad entre Marruecos y el Frente POLISARIO tras la ruptura del alto el fuego de 1991 –aunque con menores niveles de violencia respecto a 2022–, y la tensión regional entre Marruecos y Argelia.

En línea con la estrategia observada el año anterior, el enviado especial de la ONU mantuvo una serie de reuniones y contactos con diversos actores. Entre el 27 y el 30 de marzo convocó a representantes de Marruecos, el Frente POLISARIO, Argelia, Mauritania y los países que integran el llamado Grupo de Amigos del Sáhara –EEUU, España, Francia, Reino Unido y Rusia– a una serie de encuentros informales en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En estos espacios el representante de la ONU insistió en la aproximación –explícita en la resolución 2654 de octubre de 2022– que interpela a todas las partes implicadas a expandir sus posiciones respecto a sus posturas previas con el fin de facilitar una solución. El propósito de estas consultas era discutir las lecciones aprendidas del proceso político, examinar en profundidad las posiciones de cada cual y explorar fórmulas mutuamente aceptables. De Mistura también realizó una serie de visitas a la región, en las que se reunió con autoridades y representantes diplomáticos de diversos países –con el ministro de Exteriores de Marruecos en Rabat, con el de Argelia en Argel y con el presidente de Mauritania en Nouakchott, en septiembre. Ese mismo mes se reunió con el máximo dirigente del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, en Nueva York. A lo largo del año, el enviado especial de la ONU también abordó el tema del Sáhara Occidental en reuniones con altos funcionarios de Bélgica, EAU, EEUU, España, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Suiza y diplomáticos de la UE.

En uno de los hechos más significativos de 2023, **el enviado especial de la ONU visitó por primera vez el territorio del Sáhara Occidental controlado por Marruecos.** Dos años después de su nombramiento en el cargo, De Mistura viajó a principios de septiembre a El Aiún y a Dakhla y se reunió con diversos actores. Hasta esa fecha, el diplomático se había negado a aceptar las condiciones de acceso que imponía Marruecos,

que había vetado la posibilidad de reuniones con determinados grupos de la sociedad, incluyendo entidades de mujeres. Durante su visita, De Mistura mantuvo encuentros con funcionarios marroquíes y representantes electos localmente que se mostraron partidarios de las políticas y propuestas de autonomía de Rabat. También se reunió con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas saharauis –como Aminetou Haidar, Hamd Hammad, Ali Salem Tamek o El Mami Amar Salem– que denunciaron que la población saharauí no disfruta de los mismos derechos que la marroquí y alertaron sobre vulneraciones a los derechos humanos, la situación de presos políticos y detenciones de voces críticas con Marruecos durante la visita del enviado especial. También solicitaron mecanismos de vigilancia independientes sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso de periodistas y observadores.⁴³ En Dakhla, De Mistura participó en una actividad organizada por las autoridades marroquíes a la que también asistieron delegados consulares de diversos Estados que han reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y han abierto delegaciones diplomáticas en el territorio. La ONU subrayó que este encuentro no debía ser interpretado como una toma de posición de la organización sobre las delegaciones consulares establecidas en Dakhla y El Aaiún, ni tampoco como un precedente.

Las posiciones de los diferentes actores se mantuvieron en las líneas previas. Marruecos insistió en que la propuesta de autonomía que presentó hace ya casi dos décadas, en 2007, es el único resultado viable del proceso político. Según trascendió, Rabat asume que las características concretas de la propuesta de autonomía serían definidas en el marco de las negociaciones, reconoce que otros actores desearían plantear otros puntos de partida para la negociación, y defiende que la mejor vía para reactivar los contactos es el formato de mesas redondas –como las celebradas durante la intervención del anterior enviado especial de la ONU, Horst Kohler. El Frente POLISARIO, en tanto, reiteró que la autodeterminación del pueblo saharauí debe ser la base para cualquier discusión. En su encuentro con De Mistura en Nueva York, Ghali subrayó la necesidad de un proceso de descolonización del territorio y entregó al enviado especial un documento que expone las bases para el relanzamiento del proceso de paz bajo el liderazgo de la ONU. También destacó que el Frente POLISARIO debía ser el interlocutor principal de Marruecos en cualquier proceso. Argelia, principal apoyo del Frente POLISARIO, se manifestó en una línea similar, enfatizando que su papel es de observador. Argel reiteró su rechazo a la reactivación del formato

de mesa redonda, considerando que su implicación en este mecanismo de diálogo en 2018 y 2019 había sido “instrumentalizada”. Mauritania, en tanto, se mantuvo en su papel declarado de “neutralidad positiva”. En su informe anual sobre el Sáhara Occidental, el secretario general de la ONU reiteró la necesidad de restablecer el cese el fuego, de abordar un conflicto que ya dura casi cinco décadas y de que las partes desistan de precondiciones para involucrarse en un proceso negociador.

Mientras tanto, Rabat continuó con su política de búsqueda de reconocimiento internacional de su dominio de facto sobre el Sáhara Occidental. Tras el acuerdo de “normalización” anunciado en diciembre de 2022, en julio de 2023 Israel notificó que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el territorio y su intención de abrir un consulado en Dakhla. Ghali, en tanto, participó en Sudáfrica en la cumbre de los BRICS-África, que emitió un comunicado sobre la necesidad de una “solución mutuamente aceptable” al conflicto en el Sáhara Occidental. En enero de 2023 el Frente POLISARIO celebró elecciones para renovar su dirigencia en las que resultó reelecto Brahim Ghali con un 69% de los votos. En los comicios también participó como candidato alternativo Bashir Mustafá Sayyed, con una propuesta que apostaba por intensificar la confrontación militar con Marruecos. Análisis destacaron que la votación había evidenciado las disputas internas en el seno de la organización sobre la estrategia a seguir y el peso de algunos sectores que defienden una vía militar y una apuesta diplomática más agresivas, posición que tendría especial respaldo en sectores juveniles frustrados con el bloqueo de la situación.⁴⁴

Algunas voces señalaron los principales obstáculos para la reanudación de negociaciones sobre el Sáhara Occidental. Entre ellos, la amplia distancia en las posiciones para reanudar el diálogo entre las partes, la falta de un mandato firme del enviado especial de la ONU en un contexto en el que el Consejo de Seguridad afronta profundas divisiones y el escaso interés internacional en el contencioso. De Mistura también ha sido objeto de críticas por mantener una aproximación de bajo perfil. En este escenario, algunas voces identificaron a EEUU como el país mejor situado para dar un impulso al proceso diplomático liderado por la ONU, teniendo en cuenta el relativo deterioro de las relaciones entre Marruecos y Francia por el acercamiento entre París y Argel; el cambio de postura de España, que en 2022 se alineó con la propuesta de Rabat; o la relación demasiado próxima de Rusia con Argelia y el

43 Miguel Muñoz, *La visita de la ONU al Sáhara Occidental y el papel de EEUU reavivan la vía política para solucionar el conflicto*, Público, 8 de septiembre de 2023.

44 Riccardo Fabiani, *Paving the Way to Talks on Western Sahara*, Commentary / Middle East & North Africa, 20 de julio de 2023.

POLISARIO. Washington desplegó una mayor actividad diplomática en este ámbito en 2023, lo que despertó algunas expectativas sobre la reactivación de la vía política. Según trascendió, en abril, prácticamente en paralelo a las reuniones bilaterales con el enviado especial de la ONU, funcionarios estadounidenses transmitieron a representantes de Marruecos, el Frente POLISARIO y Argelia la necesidad de reactivar en proceso. En sendas conversaciones del secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, con el ministro de Exteriores de Marruecos, en mayo, y de la vicesecretaria, Wendy Sherman, con el de Argelia, en junio, también se habría enfatizado el apoyo a las gestiones de De Mistura. En septiembre y luego en diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Norte de EEUU, Joshua Harris, viajó a Marruecos y Argelia y en septiembre se reunió con Ghali en Tindouf. Cabe recordar que el Gobierno de Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en 2020 y que la administración de Joe Biden no ha revocado la medida. Según algunas fuentes, EEUU podría usar este elemento ante Argelia ante su estrechamiento de lazos con Rusia.⁴⁵ Pese a estos movimientos, algunos análisis indican que Washington no estaría dispuesto a dedicar un alto capital político al tema del Sáhara Occidental, que no está entre sus prioridades. **De cara al futuro se anticipaban nuevas interrogantes, como el posible**

impacto de la guerra en Gaza y sus repercusiones en toda la región y en las prioridades internacionales; o los efectos de la presencia de Argelia en el nuevo Consejo de Seguridad de la ONU como Estado miembro electo a partir de enero de 2024 por un plazo de dos años.

Género, paz y seguridad

El enviado personal del secretario general de la ONU realizó una visita al Sáhara Occidental controlado por Marruecos en septiembre de 2023 después de que Rabat retirara las objeciones a sus reuniones con actores de la sociedad civil, incluyendo grupos de mujeres. De Mistura se había negado previamente a viajar a la zona por la imposibilidad de reunirse con estos actores, en consonancia con los principios de la ONU y en coherencia con los compromisos en materia de participación de las mujeres en la promoción de la paz y seguridad –en implícita alusión a la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. La misión de la ONU en el territorio, MINURSO, también informó que el equipo de la misión estaba integrado por 51 mujeres (23% del total del contingente), una disminución frente al 33% de 2022, aunque por encima del 19% definido como objetivo en la estrategia de paridad de las misiones de la ONU para el período 2018-28.

45 The New Arab, US diplomat in Morocco for Western Sahara autonomy talks after Algeria visit, 18 de diciembre de 2023.

